Humanidades

Tulio Halperin Donghi

Historia contemporánea de América latina

El libro de bolsillo
Historia
Alianza Editorial

Primera edición en «El libro de bolsillo»: 1969
Decimotercera edición, revisada y ampliada: 1996
Primera edición en «Área de conocimiento: Humanidades»: 1998
Sexta reimpresión: 2005

Diseño de cubierta: Alianza Editorial

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.

© Tulio Halperin Donghi
© Alianza Editorial, S. A., Madrid, 1969, 1970, 1972, 1975, 1977, 1979, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990, 1993, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15;
28027 Madrid; teléfono 91 393 88 88
www.alianzaeditorial.es
ISBN: 84-206-3515-4
Depósito legal: M. 25.540-2005
Fotocomposición e impresión: EFCA, S.A.
Parque Industrial «Las Monjas»
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Printed in Spain

Prólogo a la presente edición

Publicada por primera vez en versión italiana en 1967, esta *Historia contemporánea de América latina* requería ya por esa razón una ampliación destinada a integrar en ella el examen de las dos décadas largas transcurridas desde entonces. Bien pronto se hizo claro que ello no era suficiente, ya que lo ocurrido en los últimos veinte años largos ilumina con una luz distinta las etapas inmediatamente anteriores en la historia latinoamericana. En consecuencia, mientras para los primeros cinco capítulos de la versión original me limité a modificaciones menores, que reflejaban sobre todo los avances de la indagación histórica en algunos temas específicos, me decidí a reemplazar el capítulo VI y final, que cubría la etapa posterior a la crisis de 1929, por otro nuevo, consagrado a las tres décadas entre aquélla y ese otro momento de ruptura que es la Revolución cubana, antes de agregarle otro nuevo sobre la etapa abierta con ésta.

Esa reestructuración parece tanto más necesaria porque, desde una perspectiva histórica –inasequible cuando se observan las cosas demasiado de cerca–, la Latinoamérica de la segunda postguerra aparece hoy dotada de un perfil más nítido de lo que se podía advertir hace dos décadas. Pero hay todavía otras razones que la hacen aconsejable y estas últimas la tornan a la vez problemática. Este libro de 1967 está inevita-

blemente marcado por el *Zeitgeist* de su momento de origen: el problema no es entonces que la imagen que propone del pasado entonces inmediato aparece quizá demasiado borrosa, sino que la que implícitamente hace suya del presente y el futuro resulta hoy insostenible.

Estas dos décadas, en efecto, han disipado el optimismo reinante durante la más avasalladora era de prosperidad conocida por el mundo desarrollado y han hecho en parte inactual la impaciencia que no poder participar plenamente de ella despertaba en su periferia; ambas actitudes subtendían más de lo que entonces se advertía tanto los diagnósticos acerca del pasado como las propuestas para el presente: las teorías del desarrollo y las revolucionarias que por entonces disputaban el terreno se apoyaban unas y otras en anticipaciones del futuro que se les aparecían dotadas de más firme certidumbre que la más escrupulosa reconstrucción histórica y que mostraban cercana la meta a la cual veían encaminarse el proceso histórico, meta cuya conquista vendría a justificar retrospectivamente el telar de desdichas que éste en buena medida había sido. Ni una ni otra de esas fes rivales dominaba sin duda esta tentativa de historia contemporánea de Latinoamérica, pero en la relectura se me hace evidente que los supuestos que ambas compartían sin saberlo, porque eran parte de la atmósfera en que habían surgido, subtendían también un texto demasiado cauteloso para arriesgarse a la profecía.

Aunque ésta fuese cuidadosamente esquivada, no dejaba de hacerse sentir, apenas la narración histórica se acercaba a los tiempos actuales, esa tan curiosa combinación de optimista seguridad en el futuro e impaciencia ante la dificultad para alcanzarlo en la que hoy reconocemos sin dificultad un rasgo de época, y que hacía que aun la más cruda descripción del impacto alcanzado por problemas aparentemente insolubles estuviese como iluminada por la implícita confianza en que la solución llegaría en la próxima vuelta del camino. ¿Es necesario decir que de esa confianza queda muy poco en la versión que aquí se ofrece, que sin duda está a su vez marcada con el

sello de un pasado más reciente, que cuenta entre las etapas más trágicas de una historia que abunda en ellas?

Ese inevitable cambio de perspectiva no ha llevado por cierto a proponer como nueva moraleja para la exploración del pasado latinoamericano a ninguna de las hoy tan prudentes y favorecidas por la desencantada sabiduría que ha heredado de las alucinadas fes de hace veinte años la ambición de guiar la marcha de Latinoamérica hacia el futuro. Por el contrario, la única que quizá alcanzaría a proponer es otra más negativa: a saber, que en Latinoamérica, más aún que en otras regiones que han logrado sedimentar un perfil más preciso a través de una experiencia histórica más prolongada, la noción de que la consumación de los tiempos nos está esperando tras el próximo recodo en su ruta histórica es necesariamente engañosa; si sus peligros como fuente de inspiración política son ya patentes para todos, los que ofrece como guía para la exploración del pasado no son menos reales.

TULIO HALPERIN DONGHI
Berkeley, junio de 1988

Capítulo 2
La crisis de independencia

Ese edificio colonial que, a juicio de los observadores poco benévolos, había durado demasiado, entró en rápida disolución a principios del siglo XIX; en 1825 Portugal había perdido todas sus tierras americanas, y España sólo conservaba a Cuba y Puerto Rico. ¿Por qué este desenlace tan rápido? Retrospectivamente se le han buscado (y desde luego encontrado) causas muy remotas, algunas de ellas latentes desde el comienzo de la conquista; al lado de ellas se han subrayado otras cuyos efectos se habrían hecho sentir acumulativamente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII.

Por lo menos para la América española, para la cual el problema se presenta con mayor agudeza, se han subrayado una y otra vez las consecuencias de la sólo parcialmente exitosa reformulación del pacto colonial: precisamente porque éste abría nuevas posibilidades a la economía indiana, hacía sentir más duramente en las colonias el peso de una metrópoli que entendía reservarse muy altos lucros por un papel que se resolvía en la intermediación con la nueva Europa industrial. La lucha por la independencia sería en este aspecto la lucha por un nuevo pacto colonial, que -asegurando el contacto directo entre los productores hispanoamericanos y la que es cada vez más la nueva metrópoli económica- con-

ceda a esos productores accesos menos limitados al mercado ultramarino y una parte menos reducida del precio allí pagado por sus frutos.

Al lado de la reforma económica estaba la reforma político-administrativa. Se ha visto ya cómo ésta no había resuelto los problemas fundamentales del gobierno de la América española y portuguesa: el reclutamiento de funcionarios dispuestos a defender, con una honradez que las dificultades de su tarea hacían heroica, los intereses de la Corona frente a las demasiado poderosas ligas de intereses locales. Pero no hay duda de que esa reforma aseguró a las colonias una administración más eficaz que la antes existente. Ésta era -según una fórmula incisiva de J. H. Parry- una de las causas profundas de su impopularidad, pues los colonos prefieren tener que enfrentar una admimistración ineficaz, y por eso mismo menos temible. Pero no era la única: al lado de ella estaba la tan invocada de la preferencia de la Corona por los funcionarios metropolitanos. Sin duda las alegaciones sobre la parcialidad regia estaban mejor fundadas en hechos de lo que quieren hacer suponer, por ejemplo, las estadísticas de un Julio Alemparte, y la parcialidad misma no se debía solamente a la mayor sensibilidad de la Administración a las solicitaciones que le llegaban de cerca, sino al temor de dar poder administrativo a figuras aliadas de antemano con las fuerzas localmente poderosas que seguían luchando tenaz y silenciosamente contra la pretensión de la Corona a gobernar de veras sus Indias. Con lo que la protesta contra el peninsular, que debía su carrera a su origen metropolitano, a veces escondía mal la repulsa del testigo molesto llegado de fuera del cerco de complicidades localmente dominante (y que en el mejor de los casos era preciso introducir en él mediante el soborno).

Tanto la enemiga contra los peninsulares favorecidos en la carrera administrativa (y en la militar y eclesiástica) como la oposición contra el creciente centralismo, eran sólo un aspecto de las reacciones despertadas en las colonias por la crecien-

te gravitación de una metrópoli renaciente. La misma resistencia –expresada en idéntica hostilidad hacia los peninsulares– se manifestaba frente a los cambios en la estructura comercial: ese enjambre de mercaderes metropolitanos que en la segunda mitad del siglo XVIII avanzaba sobre los puertos y los nudos comerciales de las Indias, cosechando una parte importante de los frutos de la activación económica, era aborrecido aun por quienes no habían sido afectados directamente por su triunfo.

Convendría no exagerar las tensiones provocadas por este intento de reordenación de las Indias; convendría, sobre todo, advertir más claramente que si ellas autorizaban algunas alarmas sobre el futuro del lazo colonial, de ningún modo hacían esperar un desenlace tan rápido; por el contrario, los conflictos que ellas parecían anticipar sólo hubiesen podido madurar en un futuro remoto: ellas anuncian, más bien que una cercana catástrofe, los delicados y lentos reajustes de una etapa de transición necesariamente larga.

¿En la renovación ideológica que (junto con la cultura hispánica en su conjunto) atravesaba la iberoamericana a lo largo del siglo XVIII, ha de hallarse causa menos discutible del fin del orden colonial? Pero esa renovación –colocada bajo signo ilustrado– no tenía necesariamente contenido políticamente revolucionario. Por el contrario, avanzó durante una muy larga primera etapa en el marco de una escrupulosa fidelidad a la Corona. Ello se fundaba en que, pese a todas sus vacilaciones, era ésta la más poderosa de las fuerzas renovadoras que actuaban en Hispanoamérica. La crítica de la economía o de la sociedad colonial, la de ciertos aspectos de su marco institucional o jurídico no implicaban entonces una discusión del orden monárquico o de la unidad imperial. La implicaban todavía menos por cuanto la Ilustración iberoamericana –del mismo modo que la metropolitana– estaba lejos de postular una ruptura total con el pasado: en ella sobrevivía mucho de la tradición monárquica del siglo anterior, y en más de uno de sus representantes la fe en el papel renovador de la Corona parece la racionalización de una fe más antigua en el rey como cabeza de ese cuerpo místico que es el reino.

Sin duda, ya desde fines del siglo XVIII, esta fe antigua y nueva tenía –en Iberoamérica como en sus metrópolis– sus descreídos. En este hecho indudable se ha hallado más de una vez la explicación para los movimientos sediciosos que abundan en la segunda mitad del siglo XVIII, y en los que se ve los antecedentes inmediatos de la revolución independiente. Pero ni parece evidente esta última vinculación, ni mucho menos la que se postula entre esas sediciones y la renovación de las ideologías políticas. Es fácil hacer –desde Nueva Granada hasta el Alto Perú– un censo impresionante de esos movimientos; vistos de cerca, ellos presentan una fisonomía escasamente homogénea y a la vez no totalmente nueva. Sin duda, podemos encontrar un elemento desencadenante común en las tensiones creadas por la reforma administrativa, que en manos de burócratas demasiado ávidos significó sobre todo un aumento de la presión impositiva; pero las respuestas son localmente muy variables. El episodio más vistoso es la guerra de castas que azotó en las dos últimas décadas del siglo XVIII al Perú; esta guerra, en que los alzados supieron combinar la nostalgia del pasado prehispánico con la lealtad al rey español, por hipótesis ignorante de las iniquidades que en su nombre se cometían en América, exacerbó las tensiones entre las castas peruanas: indios contra blancos y mestizos en el Bajo Perú; indios y mestizos contra blancos en el Alto Perú. En este sentido, más que ofrecer un antecedente para las luchas de independencia, estos alzamientos parecen proporcionar una de las claves para entender la obstinación con que esta área iba a apegarse a la causa del rey: una parte de su población nativa iba a ver en el mantenimiento del orden colonial la mejor defensa de su propia hegemonía, y en ésta la única garantía contra el exterminio a manos de las más numerosas castas indígenas y mezcladas.

Otros episodios menos vistosos se desarrollan con apoyos, si más limitados en el espacio, más unánimes: es el caso del al-

zamiento comunero del Socorro, en Nueva Granada. Pero su importancia inmediata fue mucho menor, y su fisonomía los acercaba a los movimientos de protesta local que habían abundado desde la conquista; más bien que la presencia de elementos nuevos que anuncian la crisis, lo que ellos ponen de manifiesto es la persistencia de debilidades estructurales cuyas consecuencias iban a advertirse cada vez mejor en la etapa de disolución que se avecinaba.

Menos discutible es la relación entre la revolución de independencia y los signos de descontento manifestados en muy estrechos círculos dentro de algunas ciudades de Latinoamérica desde aproximadamente 1790. Esos signos fueron, sin duda, magnificados primero por sus represores y luego por sus historiadores: es indudable, sin embargo, que desde México a Bogotá, donde en 1794 Antonio Nariño comenzaba su carrera de revolucionario traduciendo la Declaración de los Derechos del Hombre, a Santiago de Chile, donde en 1790 era descubierta una «conspiración de los franceses», a Buenos Aires, donde casi contemporáneamente otros franceses parecen haber logrado despertar en algunos esclavos esperanzas de próxima liberación gracias a una revolución republicana, a Brasil, donde en Minas Gerais una inconfidencia secesionista y republicana es descubierta y reprimida en 1789, en los más variados rincones de Latinoamérica hay signos muy claros de una nueva inquietud. El resultado de esos episodios eran los mártires y los desterrados. Tiradentes, agente de la inconfidencia de Minas Gerais, era el más célebre de los primeros. Por su parte, el más famoso de los segundos fue Francisco de Miranda, el amigo de Jefferson, amante de la gran Catalina, general de la Gironda, en su momento agente de Pitt, quien antes de fracasar como jefe revolucionario en su nativa Venezuela, hizo conocer al mundo la existencia de un problema iberoamericano, incitando a las potencias a recoger las ventajas que la disolución del imperio español proporcionaría a quienes quisieran apresurarla. Tras de esas trayectorias trágicas o brillantes se alinean muchas otras: desterrados en África, prisioneros en la metrópoli, emigrados que vegetan penosamente gracias a pensiones inglesas o francesas... Y al lado de ellos son más numerosos los que se mantienen en reserva: cuando Bolívar repite en un paisaje de ruinas romanas el juramento de Aníbal no es aún sino un rico muchacho criollo de Caracas que viaja por Europa acompañado de su preceptor; cuando en su Córdoba del Tucumán el deán Funes, futuro patriota argentino, recibe de amigos españoles, junto con entusiastas relaciones acerca de la Francia revolucionaria, la música del himno de los marselleses, es aún un eclesiástico que busca hacer carrera a la sombra del obispo, el intendente y el virrey. No es irrazonable ver en esta inquietud que de pronto lo invade todo el fruto del avance de las nuevas ideas políticas; que éste fue muy real lo advertiremos después de la revolución: burócratas modestos, desde los rincones más perdidos, mostrarán de inmediato una seguridad en el manejo del nuevo vocabulario político que revela que su intimidad con él data de antiguo. Pero este avance mismo es consecuencia de un proceso más amplio: lo nuevo después de 1776 y sobre todo de 1789 no son las ideas, es la existencia misma de una América republicana, de una Francia revolucionaria. Y el curso de los hechos a partir de entonces hace que esa novedad interese cada vez más de cerca a Latinoamérica: Portugal, encerrado en una difícil neutralidad; España, que pasa, a partir de 1795, a aliada de la Francia revolucionaria y napoleónica, muestran cada vez mejor su debilidad en medio de las luchas gigantescas que el ciclo revolucionario ha inaugurado. En estas condiciones aun los más fieles servidores de la Corona no pueden dejar de imaginar la posibilidad de que también esa corona, como otras, desaparezca. En la América española en particular, la crisis de independencia es el desenlace de una degradación del poder español que, comenzada hacia 1795, se hace cada vez más rápida.

El primer aspecto de esa crisis: ese poder se hace ahora más lejano. La guerra con una Gran Bretaña que domina el Atlántico separa progresivamente a España de sus Indias. Hace más difícil mandar allí soldados y gobernantes; hace imposible el

monopolio comercial. En continuidad sólo aparente y en oposición real con las reformas mercantiles de Carlos III, un conjunto de medidas de emergencia autorizan la progresiva apertura del comercio colonial con otras regiones (colonias extranjeras, países neutrales); a la vez conceden a los colonos libertad para participar en la ahora más riesgosa navegación sobre las rutas internas del Imperio.

Esta nueva política, cautamente emprendida por la Corona, es recibida con entusiasmo en las colonias: desde La Habana a Buenos Aires, todo el frente atlántico del imperio español aprecia sus ventajas y aspira a conservarlas en el futuro. Al mismo tiempo, alejada la presión de la metrópoli política y de la económica, esas colonias se sienten enfrentadas con posibilidades inesperadas: un economista ilustrado de Buenos Aires se revela convencido de que su ciudad está en el centro del mundo comercial y que tiene recursos suficientes para utilizar por sí sola las ventajas que su privilegiada situación le confiere. Y, en efecto, el comercio de Buenos Aires se mueve en un horizonte súbitamente ampliado, en que existen Hamburgo y Baltimore, Estambul y las islas azucareras del Índico, del que, en cambio, han desaparecido a la vez España e Inglaterra; en él las fuerzas de la ciudad austral parecen menos diminutas. De allí una conciencia más viva de la divergencia de destinos entre España y sus Indias, una confianza (que los hechos van a desmentir luego cruelmente) en las fuerzas económicas de esas Indias, que se creen capaces de valerse solas en un sistema comercial profundamente perturbado por las guerras europeas.

La transformación es paulatina: sólo Trafalgar, en 1805, da el golpe de gracia a las comunicaciones atlánticas de España. Y por otra parte, si el desorden del sistema comercial prerrevolucionario da posibilidades nuevas a mercaderes-especuladores de los puertos coloniales, no beneficia de la misma manera a la economía colonial en su conjunto. En esa Buenos Aires que cree ser el centro del mundo comercial, se apilan los cueros sin vender; en Montevideo forman túmulos más altos que las modestas casas; en la campana del litoral rioplatense

los ganados, sacrificados a ritmo vertiginoso hasta 1795, vuelven luego de esa fecha a poblar la pampa con ritmo igualmente rápido: las matanzas se interrumpen por falta de exportación regular. Aun en Cuba, donde un conjunto de factores muy complejos impulsa en esta etapa la expansión azucarera y cafetera, las vicisitudes del revolucionado comercio mundial imponen alternativas brutales de precios; a los años buenos de 1790 a 1796 sigue la racha negra de 1796 a 1799; en la década siguiente también los primeros cinco años de altos precios y exportación expedita son seguidos de otros muy duros. Esas alternativas provocan mayor impaciencia que las limitaciones acaso más graves pero más uniformes de etapas anteriores: como los comerciantes especuladores, también los productores a los que las vicisitudes de la política metropolitana privan de sus mercados tienden a ver cada vez más el lazo colonial como una pura desventaja; la libertad que derivaría de una política comercial elaborada por las colonias mismas pasa a ser una aspiración cada vez más viva.

Acaso más que esa aspiración pesa en la marcha a la independencia el espectáculo mismo de una metrópoli que no puede ya gobernar la economía de sus colonias, porque su inferioridad en el mar la aísla progresivamente de ellas. En lo administrativo, el agostamiento de los vínculos entre metrópoli y colonias comenzará a darse más tardíamente que en lo comercial, pero en cambio tendrá un ritmo más rápido. En uno y otro campo los quince años que van de 1795 a 1810 borran los resultados de esa lenta reconquista de su imperio colonial que había sido una de las hazañas de la España borbónica. En medio de las tormentas postrevolucionarias, esa hazaña revela, sin duda, su fragilidad, pero al mismo tiempo ha logrado cambiar demasiado a las Indias para que el puro retorno al pasado sea posible. Por otra parte, la Europa de las guerras napoleónicas –ese bloque continental ávido de productos tropicales, y sobre todo esa Inglaterra necesitada de mercados que remplacen los que se le cierran en el continente– no está tampoco dispuesta a asistir a una marginalización

de las Indias, que sólo le deje abierta, como en el siglo XVII, la puerta del contrabando. Si en el semiaislamiento de ese quinquenio pudo parecer a algunos hispanoamericanos que la ruptura del lazo colonial iba a permitir prolongar los esbozos de autonomía mercantil en curso hasta alcanzar una independencia económica auténtica, este desenlace era en los hechos extremadamente improbable.

Pero para otros (en particular para los productores que conocen en esos años afiebrados alternativas de prosperidad y ruinoso aislamiento) la independencia política no debe ser a la vez económica: debe establecer con las nuevas metrópolis económicas un lazo que sería ilusión creer que será de igualdad... He aquí algunas de las alternativas que la disolución del lazo colonial plantea ya antes de producirse. Esas alternativas no tendrán siquiera tiempo de mostrarse con claridad: en 1806, en el marco de la guerra europea, el dominio español en Indias recibe su primer golpe grave; en 1810, ante lo que parece ser la ruina inevitable de la metrópoli, la revolución estalla desde México a Buenos Aires.

En 1806 la capital del virreinato del Río de la Plata es conquistada por sorpresa por una fuerza británica; la guarnición local (pese a que desde la guerra que llevó a la conquista de la Colonia del Sacramento, Buenos Aires es –en el papel– uno de los centros militares importantes de la América española) fracasa en una breve tentativa de defensa. Los conquistadores capturan rico botín de metálico, que será paseado en triunfo en Londres; comienzan por asombrarse de encontrar tantas adhesiones, desde los funcionarios que juran fidelidad al nuevo señor, hasta los frailes que servicialmente predican sobre el texto paulino acerca del origen divino de todo poder. Las conspiraciones, sin embargo, se suceden y, finalmente, un oficial naval francés al servicio del rey de España conquista Buenos Aires con tropas que ha organizado en Montevideo. Al año siguiente, una expedición británica más numerosa conquista Montevideo, pero fracasa frente a Buenos Aires, donde se han formado milicias de peninsulares y americanos. El virrey, que en 1806 y 1807 ha huido frente al invasor, es declarado incapaz por la Audiencia; interinamente lo reemplaza Liniers, el jefe francés de la Reconquista. La legalidad no se ha roto; el régimen colonial está, sin embargo, deshecho en Buenos Aires: son las milicias las que hacen la ley, y la Audiencia ha tenido que inclinarse ante su voluntad.

Este anticipo del futuro es seguido bien pronto de una crisis más general, que comienza en la Península. Su punto de partida es muy conocido: se trata de un conjunto de hechos suficientemente dramáticos para haber apasionado a los cultores de la *histoire événementielle*, generalmente condenados a horizontes más grises. Es el estallido de un drama de corte, cuyo ritmo gobierna desde lejos Bonaparte, el paradójico protector de los Borbones de España, que lo utiliza para provocar el cambio de dinastía. Pero las consecuencias que esta secuencia tiene en España son incomprensibles fuera de un marco histórico más vasto: la guerra de Independencia española es parte de un conflicto mundial sin el cual no hubiera sido posible (no sólo importa aquí que la expulsión de los franceses haya sido lograda gracias a la presencia de un ejército expedicionario británico; ya antes de ello, lo que animó la resistencia española fue la que fuera de España encontraba el poder napoleónico, por añadidura, esa resistencia se apoyó en una movilizacion popular que –así fuesen antirrevolucionarias sus consignas– se integra muy bien en el nuevo estilo de guerrear aportado por la revolución).

La guerra de Independencia significa que nuevamente la metrópoli –ahora aliada de Inglaterra– puede entrar en contacto con sus Indias. Significa también que, de un modo o de otro, esa poderosa aliada se abre el acceso al Mercado indiano; parece surgir entonces la posibilidad de un futuro parecido a lo que fue el pasado brasileño... Pero la guerra significa, por añadidura, que la metrópoli (la España antinapoleónica, cada vez más reducida, golpeada por las victorias francesas, y que pasa de la legalidad interina del Consejo de Regencia a una revolución que no quiere decir su nombre, pero se expresa ine-

quívocamente en las Cortes liberales de Cádiz) tiene recursos cada vez menores para influir en sus Indias. En ellas estallan las tensiones acumuladas en las etapas anteriores –la del reformismo ilustrado, la del aislamiento de guerra–, las elites urbanas españolas y criollas desconfían unas de otras, ambas proclaman ser las únicas leales en esa hora de prueba; para los peninsulares, los americanos sólo esperan la ruina militar de la España antinapoleónica para conquistar la independencia; para los americanos, los peninsulares se anticipan a esa ruina preparándose para entregar las Indias a una futura España integrada en el sistema francés. Ambas acusaciones parecen algo artificiosas, y acaso no eran totalmente sinceras. Son en todo caso los peninsulares quienes dan los primeros golpes a la organización administrativa colonial.

En México reaccionan frente a la inclinación del virrey Iturrigaray a apoyarse en el cabildo de la capital, predominantemente criollo, para organizar con su colaboración una junta de gobierno que, como la metropolitana de Sevilla, gobernase en nombre del rey cautivo, Fernando VII. El 15 de septiembre de 1808, un golpe de mano de los peninsulares captura al virrey y lo reemplaza; la Audiencia, predominantemente peninsular, se apresura a reconocer el cambio. En el Río de la Plata, el cambio de alianzas de 1808 coloca a Liniers bajo una luz sospechosa; por lo menos los peninsulares prefieren creerlo así. Una tentativa del cabildo de Buenos Aires –predominantemente europeo– por destituirlo, fracasa, debido a la supremacía local de las milicias criollas. Pero en Montevideo, ciudad de guarnición, los oficiales peninsulares dominan y establecen una junta que desconoce al virrey y pretende gobernar todo el virreinato; si bien la empresa no encuentra eco, la junta disidente domina la entera jurisdicción montevideana.

Estos episodios siguen un esquema que luego ha de repetirse: son ahora fuerzas de raíz local las que se contraponen; los grandes cuerpos administrativos ingresan en el conflicto político para conferir una legitimidad por otra parte bastante dudosa a las soluciones que esas fuerzas han impuesto. Los movimientos criollos reiterarán sustancialmente el mismo esquema de los dirigidos por peninsulares: en Chile, en 1808, al morir el gobernador Muñoz de Guzmán, apoyan al jefe de la guarnición, coronel García Carrasco, contra el presidente de la Audiencia y logran hacerlo gobernador interino; Juan Martínez de Rosas, jefe intelectual de los criollos chilenos, será por un tiempo su secretario. García Carrasco termina por librarse de sus incómodos asesores, que entre tanto han transformado la estructura del cabildo de Santiago para afirmar a través de él su ascendiente, asegurando el predominio numérico de los criollos. Pero si Martínez de Rosas es confinado en el sur, el golpe recibido por la organización colonial en Chile es irreparable: el gobernador, la Audiencia, el cabildo siguen enfrentándose enconadamente mientras el marco institucional de la monarquía española cae en ruinas... En Buenos Aires, al salvar a Liniers de las asechanzas del cabildo dominado por los peninsulares, los oficiales de las milicias criollas afirman una vez más su poder; el gran rival de Liniers, el comerciante peninsular Martín de Alzaga, que desde el cabildo ha organizado la defensa de la ciudad en 1807, es confinado en el sur...

Estos movimientos criollos se habían mantenido en los límites –cada vez más imprecisos– de la legalidad. En 1809 otros iban a avanzar hasta la rebelión abierta. En el Alto Perú, viejas rivalidades oponían al presidente y los oidores de la Audiencia de Charcas, con jurisdicción sobre la región entera. El conflicto adquirió matices políticos al hacerse sentir –allí como en el resto del virreinato– los efectos de la acción de la infanta Carlota Joaquina, hermana del rey cautivo de España, refugiada desde 1808 con su esposo, el regente de Portugal, en Río de Janeiro. La infanta había comenzado a desarrollar –con no demasiada habilidad y aun menos honradez– una política personal, destinada a convencer a los notables del alborotado Río de la Plata, y aun de otros virreinatos, de las ventajas de reconocerla como soberana interina: para ello se presentaba alternativamente como abanderada del liberalismo y del antiguo régimen, de la hegemonía criolla y de la peninsu-

lar. Había encontrado ya en 1809 infinidad de catecúmenos, acaso tan sinceros como ella: algunos de los futuros jefes de la revolución de independencia no se fatigaban de denunciar ante la infanta a ese peligroso secesionista, ese republicano jacobino que era don Martín de Alzaga; la princesa, por su parte, terminó por actuar como *agent provocateur*, denunciando a las autoridades disidentes de Montevideo a los más comprometedores de sus adherentes criollos... En Charcas la infanta reclutó en sus filas al presidente Pizarro; bastó ello para que los oidores, ante el peligro de ser anticipados por su rival, prohijaran una junta local, destinada a gobernar en nombre del rey cautivo. A esta revolución de criollos blancos sigue la revolución mestiza de La Paz. Ambas son sofocadas por tropas enviadas por los virreyes de Lima y Buenos Aires, y reprimidas con una severidad que antes solía reservarse para rebeldes de más humilde origen.

En la presidencia de Quito, el presidente-intendente fue igualmente depuesto, en agosto de 1809, por una conspiración de aristócratas criollos; un senado, presidido por el marqués de Selva Alegre, pasó a gobernar sobre la entera jurisdicción. Su poder duró poco: un año después, algunos jefes del movimiento, vencidos por tropas enviadas por el virrey de Nueva Granada, eran ejecutados; también ellos habían pretendido gobernar en nombre del rey cautivo, pero no por eso dejaban de ser tenidos por rebeldes.

Esos episodios preparaban la revolución. Mostraban, en primer término, el agotamiento de la organización colonial: en más de una región ésta había entrado en crisis abierta; en otras, las autoridades anteriores a la crisis revelaban, a través de sus vacilaciones, hasta qué punto habían sido debilitadas por ella: así, en Nueva Granada, en 1809, el virrey aceptó ser flanqueado por una junta consultiva. En el naufragio del orden colonial, los puntos reales de disidencia eran las relaciones futuras entre la metrópoli y las Indias y el lugar de los peninsulares en éstas, ya que aun quienes deseaban mantener el predominio de la España europea y el de sus hijos estaban tan

dispuestos como sus adversarios a colocarse fuera de un marco político-administrativo cuya ruina era cada vez menos ocultable. En estas condiciones las fuerzas cohesivas, que en la Península eran tan fuertes, aun en medio de la crisis (porque se apoyaban en una comunidad nacional efectivamente existente), contaban en Hispanoamérica bastante poco; ni la veneración por el rey cautivo –exhibida por todos, y a menudo animada de una sospechosa sinceridad– ni la fe en un nuevo orden español surgido de las cortes constituyentes, podían aglutinar a este subcontinente entregado a tensiones cada vez más insoportables.

Pero de esos dos puntos de disidencia –relaciones con la metrópoli, lugar de los metropolitanos en las colonias– todo llevaba a cargar el acento sobre el segundo. En efecto, la metrópoli misma estaba siendo conquistada por los franceses; si era notorio que el dominio naval británico impediría que esa conquista se extendiera a las Indias, no parecía, en 1809 o 1810, que la incorporación de España al dominio napoleónico fuese un proceso reversible. Por otra parte, esta España resistente, reducida a Andalucía y luego al recinto de Cádiz, parecía dispuesta a revisar el sistema de gobierno de sus Indias, y transformarlas en provincias ultramarinas de un reino renovado por la introducción de instituciones representativas. Esto en cuanto al futuro político de las Indias; en cuanto a la economía, la alianza británica, de la que dependía para su supervivencia la España antinapoleónica, aseguraba que el viejo monopolio estaba muerto: en el Río de la Plata fue el último virrey quien, al autorizar el comercio libre con Inglaterra, puso las bases de lo que sería la economía de la Argentina independiente.

En cambio, el problema del lugar de los peninsulares en Hispanoamérica se hacía cada vez más agudo: las revoluciones comenzaron por ser tentativas de los sectores criollos de las oligarquías urbanas por reemplazarlos en el poder político. La administración colonial, con la cautela adecuada a las circunstancias, puso, sin embargo, todo su peso en favor de

los peninsulares: basta comparar la severidad nueva con que fueron reprimidos los movimientos de Quito y el Alto Perú con la reconciliación entre el virrey Cisneros, que en Buenos Aires sucedió a Liniers, y la junta disidente de Montevideo; sólo el mantenimiento del dominio militar de Buenos Aires por los cuerpos criollos impidió que los antes rebeldes dominaran por entero la vida del virreinato. En los virreyes, los intendentes, las audiencias, se veía ahora sobre todo a los agentes de la supremacía de los españoles de España sobre las altas clases locales: eso simplificó enormemente el sentido de los primeros episodios revolucionarios en la América del Sur española. En cambio, en México y las Antillas otras tensiones gravitan más que las de españoles y elites criollas blancas: en las islas la liquidación de los plantadores franceses de Haití proporcionaba una lección particularmente impresionante sobre los peligros de una escisión dentro de la población blanca. En México fue la protesta india, y mestiza, la que dominó la primera etapa de la revolución, y la condujo al fracaso, al enfrentarla con la oposición conjunta de peninsulares y criollos. Si bien también en la América del Sur española esas fronteras de la sociedad colonial que separaban las castas no dejaron de hacerse sentir variando localmente el ritmo del avance revolucionario, su influjo no bastó para detenerlo. Se permitirá, entonces, que se examine, antes que la emancipación mexicana (ese tardío armisticio entre la revolución y la contrarrevolución locales), el avance de la revolución sudamericana.

En 1810 se dio otra etapa en el que parecía ser irrefrenable derrumbe de la España antinapoleónica: la pérdida de Andalucía reducía el territorio leal a Cádiz y alguna isla de su bahía; en medio de la derrota, la Junta Suprema sevillana, depositaria de la soberanía, era disuelta sangrientamente por la violencia popular, en busca de responsables del desastre: el cuerpo que surgía en Cádiz para reemplazarla se había designado a sí mismo; era titular extremadamente discutible de una soberanía ella misma algo problemática.

Este episodio proporcionaba a la América española la oportunidad de definirse nuevamente frente a la crisis del poder metropolitano: en 1808, una sola oleada de lealtad dinástica y patriotismo español había atravesado las Indias; en todas partes había sido jurado Fernando VII y quienes en su nombre gobernaban. Dos años de experiencia con un trono vacante, y que lo seguiría estando por un futuro indefinido, los ensayos –de signo peninsular o criollo–, por definir de un modo nuevo las relaciones con la revolucionaria metrópoli, parecían anticipar ahora una respuesta más matizada. Así parecieron creerlo las autoridades coloniales que habían gobernado en nombre de Sevilla, y ahora aspiraban a seguir haciéndolo en nombre de Cádiz; por eso intentaron en casi todas partes dorar la difusión de nuevas tan alarmantes.

Esas precauciones no logran su propósito: la caída de Sevilla es seguida en casi todas partes por la revolución colonial; una revolución que ha aprendido ya a presentarse como pacífica y apoyada en la legitimidad. ¿Hasta qué punto era sincera esta imagen que la revolución presentaba de sí misma? Exigir una respuesta clara significa acaso no situarse en la perspectiva de 1810. Sin duda había razones para que un ideario independentista maduro prefiriese ocultarse a exhibirse: junto al vigor de la tradición de lealismo monárquico entre las masas populares (pero este rasgo tiende acaso a exagerarse, puesto que bastaron algunos años de revolución para hacerlo desaparecer) pesaba la coyuntura internacional que obligaba a contar con la benevolencia inglesa (y la nueva aliada de España, si podía mantener una ecuánime simpatía frente a los distintos centros locales que gobernaban en nombre del rey cautivo, no podía, en cambio, extenderla a movimientos abiertamente secesionistas). Pero, en medio de la crisis del sistema político español, el pensamiento de los revolucionarios podía ser sinceramente más fluctuante de lo que la tesis del fingimiento quiere suponer. Sobre todo, ésta tiende a olvidar algo muy importante: los revolucionarios no se sienten rebeldes, sino herederos de un poder caído, probablemente para siem-

pre: no hay razón alguna para que marquen disidencias frente a ese patrimonio político-administrativo que ahora consideran suyo y al que entienden hacer servir para sus fines.

Estas consideraciones parecen necesarias para apreciar el problema del tradicionalismo y la novedad ideológica en el movimiento emancipador: más que las ideas políticas de la antigua España (ellas mismas, por otra parte, reconstruidas no sin deformaciones por la erudición ilustrada) son sus instituciones jurídicas las que convocan en su apoyo unos insurgentes que no quieren serlo. En todas partes, en efecto, el nuevo régimen, si no se cansa de abominar del viejo sistema, aspira a ser heredero legítimo de éste: en los defensores del antiguo régimen le interesa mostrar también a rebeldes contra la autoridad legítima.

Y en casi todas partes las nuevas autoridades pueden exhibir signos –sin duda algo discutibles– de esa legitimidad que tanto les interesa. Las revoluciones, que se dan sin violencia, tienen por centro al Cabildo; esta institución municipal (que ha resistido mal a los avances de las magistraturas delegadas por la Corona en sus Indias, y –renuévese por cooptación o por compra y herencia de cargos– representa tan escasamente a las poblaciones urbanas) tiene por lo menos la ventaja de no ser delegada de la autoridad central en derrumbe; por otra parte, la institución del Cabildo Abierto –reunión de notables convocada por las autoridades municipales en las emergencias más graves– asegura en todos los casos (aun en Buenos Aires, donde el cabildo es predominantemente peninsular) la supremacía de las elites criollas. Son los cabildos abiertos los que establecen las juntas de gobierno que reemplazan a los gobernantes designados desde la metrópoli: el 19 de abril en Caracas, el 25 de mayo en Buenos Aires, el 20 de julio en Bogotá, el 18 de septiembre en Santiago de Chile. Esos gobernantes se inclinan en casi todas partes ante los acontecimientos: la Junta de Buenos Aires no se cansará de exhibir la renuncia –dudosamente espontánea– del último virrey, que previamente ha aprobado las reuniones de las que el cambio

de régimen ha surgido; también sin resistencia en Caracas el capitán general ha entregado una renuncia que es considerada signo de la legitimidad del poder que lo sustituye. En Nueva Granada y en Chile las juntas comienzan por ser presididas por los funcionarios a los que reemplazan: el virrey, en Bogotá; el anciano conde de la Conquista, gobernador interino antes instalado por la Audiencia (ella misma hostil al nuevo orden), en Santiago. Ese prudente cuidado de la legitimidad lleva la huella de lo que fueron esos primeros jefes del movimiento emancipados: abogados, funcionarios, maduros comerciantes trocados en jefes de milicias...

Por ahora la revolución es, en efecto, un drama que se representa en un escenario muy limitado: las elites criollas de las capitales toman su venganza por las demasiadas postergaciones que han sufrido; herederas de sus adversarios, los funcionarios metropolitanos, si bien saben que una de las razones de su triunfo es que su condición de americanas les confiere una representividad que todavía no les ha sido discutida –la de la entera población indiana–, y están dispuestas a abrir a otros sectores una limitada participación en el poder, institucionalizada en reformas liberales, no apoyan (no conciben siquiera) cambios demasiado profundos en las bases reales del poder político. No parecen advertir hasta qué punto su propia acción ha comenzado a destruir el orden colonial, del que piensan heredar; no adivinan que sus acciones futuras completarán esta obra destructiva. Pero ya no pueden detenerse; estos hombres prudentes han emprendido una aventura en que las alternativas, como dice verazmente la retórica de la época, son la victoria o la muerte: los ejecutados de 1809 muestran, en efecto, cuál es el destino que los espera en caso de fracasar.

Y, por mucha que sea su habilidad para envolverse con el manto de la legalidad, saben de antemano que ésta podrá ponerlos en mejor situación para combatir a sus adversarios internos, pero no doblegará la resistencia de éstos. En todas partes, funcionarios, clérigos, militares peninsulares utilizan su poder en contra de un movimiento que saben tramado en su

daño; la defensa de su lugar en las Indias la identifican (sin equivocarse) con la del dominio español. Hay así una guerra civil que surge en los sectores dirigentes; cada uno de los bandos procurará como pueda extenderla, buscar, fuera del círculo estrecho en que la lucha se ha desencadenado, adhesiones que le otorguen la supremacía.

Las primeras formas de expansión de la lucha siguen también cauces nada innovadores: las nuevas autoridades requieren la adhesión de sus subordinados. En Nueva Granada, en Chile, no encuentran, por el momento oposiciones importantes. En el Río de la Plata y en Venezuela sí las hallan: por otra parte, la revolución no ha tocado al virreinato del Perú, donde un virrey particularmente hábil, Abascal, organiza la causa contrarrevolucionaria. De la revolución surge de inmediato la guerra: hasta 1814, España no puede enviar tropas contra sus posesiones sublevadas, y aun entonces ellas sólo actúan eficazmente en Venezuela y Nueva Granada.

En el **Río de la Plata** la Junta revolucionaria envía dos expediciones militares a reclutar adhesiones: una de ellas, dirigida por Belgrano, el abogado de Salamanca y economista ilustrado, del que las circunstancias han hecho un jefe militar, fracasa en el Paraguay. Otra, tras de conquistar Córdoba, donde un foco de resistencia cuenta entre sus jefes al obispo y a Liniers (que es ejecutado), recoge las adhesiones del resto de Tucumán y ocupa casi sin resistencia el Alto Perú. Allí –primer signo de la voluntad de ampliar socialmente la base revolucionaria–, la expedición emancipa a los indios del tributo y declara su total igualdad, en una ceremonia que tiene por teatro las ruinas preincaicas de Tiahuanaco. El éxito de esta tentativa es escaso: los criollos altoperuanos se sienten, gracias a ella, más identificados con la causa del rey, y la movilización política de los indios no parece, por el momento, fácil de lograr. En julio de 1811, en Huaqui, las fuerzas enviadas por el virrey del Perú vencen a las de Buenos Aires; el Alto Perú –y con él la plata de Potosí, que ha sido la base de la economía y las finanzas virreinales– quedan perdidos para la causa revolucionaria. La frontera de la revolución se fijará (luego del avance de los realistas sobre Tucumán y Salta, y de dos contraofensivas revolucionarias de éxito efímero) en la que separaba las audiencias de Buenos Aires y Charcas; en Salta será Martín Güemes, aristocrático jefe de la plebe rural, desconfiada de la lealtad revolucionaria de la aristocracia a la vez comercial y terrateniente, quien defienda con recursos sobre todo locales esa frontera. En el Alto Perú, con la emancipación de los indios y en Salta, con el movimiento plebeyo de Güemes, los revolucionarios de Buenos Aires han mostrado que son capaces de buscar apoyos en sectores que la sociedad colonial (en la que esos mismos revolucionarios tenían lugar elevado) colocaba muy abajo. Acaso esta audacia era más fácil porque el Alto Perú y Salta estaban muy lejos, y esa política no debía tener consecuencias en cuanto a la hegemonía local de los sectores que en Buenos Aires habían comenzado la revolución. Por el contrario, en teatros más cercanos la clase dirigente revolucionaria de Buenos Aires iba a mostrarse mucho más circunspecta.

Así iba a advertirse en la política seguida frente a la Banda Oriental. La revolución de 1810 iba a ser punto de partida de una nueva disidencia de Montevideo, en la que más que las reticencias del puerto rival de Buenos Aires contaba la presión de la estación naval española y sus oficiales peninsulares. Frente a ella, el gobierno revolucionario se decidió, a duras penas, a una acción militar: en 1811 la interrumpió mediante un armisticio que daba a las fuerzas portuguesas (primero llamadas a la Banda Oriental por los disidentes de Montevideo) papel de garantes; junto con Portugal, era Gran Bretaña la que aparecía como árbitro de la situación en esa frontera entre la América española y portuguesa. Al mismo tiempo iba a darse en la Banda Oriental, primero alentado y luego hostilizado por el gobierno revolucionario, un alzamiento rural encabezado por José Artigas: el movimiento rompía más radicalmente con las divisiones sociales heredadas, debilitadas, por otra parte, por la emigración temporaria de la población uru-

guaya a tierras de Entre Ríos, ese «éxodo del pueblo oriental» que fue la respuesta de Artigas a la ocupación de la campaña uruguaya por fuerzas portuguesas, aceptada por Buenos Aires. Retomada la lucha contra el Montevideo realista, una insegura alianza se estableció entre el artiguismo oriental y el gobierno de Buenos Aires. Sin embargo, en el mismo año de 1814 en que una fuerza expedicionaria de ese gobierno, comandada por el general Alvear, conquistaba finalmente Montevideo, el artiguismo, de nuevo en ruptura desde un año antes, se extendía por lo que había sido jurisdicción de la Intendencia de Buenos Aires; las nuevas provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes se constituían políticamente bajo la égida de Artigas, proclamado protector de los pueblos libres. En 1815, el influjo de Artigas se afirmaba efímeramente sobre Córdoba, excediendo así los límites del litoral ganadero, que había sido tributario comercial de Buenos Aires durante el régimen colonial. El movimiento artiguista encontró la decidida resistencia del gobierno revolucionario de Buenos Aires, que veía en él no sólo un peligro para la cohesión del movimiento revolucionario, sino también una expresión de protesta social que requería ser inmediatamente sofocada. Esta interpretación, válida hasta cierto punto para la Banda Oriental, lo era bastante menos para las tierras antes dependientes de Buenos Aires, donde todos los sectores sociales, capitaneados por los más grandes propietarios y comerciantes, apoyaban la disidencia artiguista. En todo caso los argumentos sin duda sinceramente esgrimidos desde Buenos Aires contra el artiguismo mostraban hasta qué punto el equipo dirigente revolucionario se mostraba apegado al equilibrio social que sus acciones debían necesariamente comprometer.

Esas coincidencias de objetivos no impidieron que ese equipo dirigente mostrara, desde el comienzo, muy graves fisuras. La junta constituida para reemplazar al virrey estuvo bien pronto dividida entre los influjos opuestos de su presidente, el coronel Saavedra, maduro comerciante altoperuano que era desde 1807 jefe del más numeroso cuerpo de milicias

criollas de Buenos Aires, y en 1809 había salvado a Liniers de las asechanzas de los peninsulares alzados, y de su secretario, el abogado Mariano Moreno, que en aquella oportunidad había figurado entre los adversarios del virrey y ahora revelaba un acerado temple revolucionario. Moreno estaba detrás de las medidas depuradoras que los hechos revelaban ineludibles: expulsión del virrey y la Audiencia, cambio del personal del Cabildo, ejecución de los jefes de la oposición cordobesa, entre ellos Liniers. Su influjo fue creciendo a lo largo de 1810; a fines de ese año, ante una tentativa –por otra parte muy poco digna de ser tomada en serio– de propaganda en favor de la coronación de Saavedra, logró de la Junta medidas que eran una humillación para éste. Su victoria era poco sólida: la política severa que era la suya, si se imponía debido a las exigencias de la hora, tendía a hacerlo impopular en la medida en que se adivinaba detrás de ella, más bien que un conjunto de recursos de excepción, la tentativa de erigir en el Río de la Plata una réplica de la Francia republicana. Por otra parte, a fines de 1810, la Junta, expresión de una revolución municipal, como había sido la de Buenos Aires, debió ampliarse para incluir representantes de los cabildos de las demás ciudades del virreinato. Ahora entraba en ella, con el deán cordobés Funes, un rival para Moreno, quien –ante la evidencia de que su facción estaba derrotada– renunció y aceptó un cargo diplomático en Londres. Nunca iba a ejercerlo; murió en la travesía... Su partido, decapitado, fue objeto, en 1811, de una persecución en regla, con juicios, destierros y proscripciones. El triunfo de los moderados se reveló también efímero; a fines de 1811 debían establecer un gobierno más concentrado –el triunvirato– para enfrentar la difícil situación revolucionaria y aplicar también ellos la política dura: a los saavedristas se debió la erección de horcas en Buenos Aires para la ejecución de Alzaga y otros conspiradores adversarios del movimiento.

Esta severidad nueva no salvó a la facción saavedrista de ser expulsada por una revolución militar en octubre de 1812; ella marcó el fin del predominio de las milicias urbanas, creadas en

1807; ahora eran los oficiales del ejército regular, ampliado por la revolución de 1810, quienes dictaban la ley. Ellos y algunos sobrevivientes de las etapas políticas anteriores formaron en la logia Lautaro, que iba a dirigir de modo apenas secreto la política de Buenos Aires hasta 1819. Entre los miembros de la logia contaban dos oficiales llegados de España en 1812; el mercurial e inquieto Alvear y el más circunspecto –por el momento menos escuchado– San Martín. Alvear era el hombre de la hora: enviado a Montevideo para recoger los laureles de una victoria ya segura, había logrado colocar a un pariente, sacado de la oscuridad de un cargo notarial en el obispado, como director supremo en reemplazo del triunvirato. Luego de la conquista de Montevideo, tomó personalmente el gobierno; en él iba a durar poco: ante la acentuación de la resistencia interna tendió a apoyarse en el ejército como instrumento de represión; al mismo tiempo –frente a lo que le parecía el fracaso de la experiencia revolucionaria– buscaba, sea en el protectorado inglés, sea en una reconciliación con la España en que había sido restaurado el rey legítimo, una salida sin victoria, pero sin derrota. Finalmente, fue la parte del ejército enviada a combatir al artiguismo litoral quien prefirió derrocar a Alvear; con su caída concluía un ciclo de la revolución rioplatense, y parecía concluir la revolución misma; aun muy cercana a su momento más alto, alcanzado en 1813, cuando una Asamblea soberana, reunida en Buenos Aires, aunque había prescindido de declarar la independencia, había dado pasos importantes en la modernización legislativa (supresión de mayorazgos y títulos nobiliarios; supresión del tribunal inquisitorial; libertad para los hijos de esclavas nacidos en el futuro) y afirmado –mediante la oficialización del escudo, la bandera y el himno– los símbolos de la soberanía que no se decidía a proclamar.

Dividida contra sí misma, expulsada nuevamente del Alto Perú, la revolución de Buenos Aires parecía ahora agonizar. La de **Chile** moría en 1814. También aquí las facciones habían deshecho la solidaridad del movimiento de apoyar su hegemonía en fuerzas necesariamente menos restringidas: el ejército, la plebe urbana... La propaganda revolucionaria adquirió intensidad mayor; la primera imprenta de Chile (importada por un comerciante norteamericano amigo de la Revolución) iba a ser usada, sobre todo, para difundir el nuevo evangelio político. Pero a principios de 1813, tropas desembarcadas del Perú en el sur de Chile (donde el nuevo régimen nunca había sido reconocido) comenzaban la lucha contra la revolución. Ésta cerraba filas para defenderse, pero fracasaba en el sitio de Chillán, transformada en fortaleza realista; caída Talca, el movimiento chileno redescubría su orientación moderada y pactaba en Lircay la reconciliación con el invasor. José Miguel Carrera logró huir de su prisión realista; en Santiago, mediante un nuevo golpe militar, expulsó al dictador moderado de la Lastra y se preparó para la última resistencia; el primero de octubre de 1814, O'Higgins era vencido en Rancagua por los realistas, mientras Carrera permanecía en la retaguardia. El general realista Osorio entraba en Santiago; los más significados revolucionarios huían a Mendoza, más allá de la cordillera, donde podían proseguir con más calma sus luchas internas: frente a Carrera y sus hermanos, jefes de las tendencias radicales, O'Higgins aparecía a la cabeza de un nuevo sector moderado, ganado ya sin reticencias a la causa revolucionaria, pero dispuesto a controlar firmemente su rumbo. Por el momento no parecía, sin embargo, que esas luchas pudiesen volver a gravitar en el futuro de Chile.

En el norte de Sudamérica las alternativas de la primera etapa revolucionaria eran aún más dramáticas. En **Venezuela** la revolución del Jueves Santo de 1810, que colocaba al frente de la capitanía a una junta de veintitrés miembros, encontraba finalmente una cabeza en Miranda. Recibido sin entusiasmo por los oligarcas, que debían su riqueza a la expansión del cacao en el litoral venezolano y controlaban el movimiento revolucionario, Miranda intentó dotarlo de un aparato militar eficaz, y a la vez radicalizarlo: en julio de 1811 lograba que –no

sin íntima perplejidad- la revolución venezolana proclamara la independencia de España. Esa revolución controlaba el litoral del cacao; el oeste y el interior seguían leales a la causa del rey, y en Coro, base naval al oeste de Caracas, el capitán Monteverde mantenía una resistencia armada, por el momento escasamente alarmante.

El terremoto de Caracas -en el que los realistas vieron un castigo celeste- pareció romper ese equilibrio demasiado apacible: Monteverde avanzó hacia el este, sin encontrar una resistencia suficientemente enérgica de Miranda, que parece haber estado animado desde el comienzo por cierto pesimismo en cuanto al futuro de la revolución venezolana. El 30 de junio la guarnición revolucionaria de Puerto Cabello se pronunciaba por la causa realista: Bolívar, que había actuado hasta el momento entre los secuaces radicales de Miranda, y era oficial en su ejército, fracasó en una tentativa de sofocar el alzamiento. Mientras tanto, el desorden crecía en las plantaciones de los jefes revolucionarios: la revolución comenzaba a alborotar a los negros y pareció llegado el momento de darla por terminada. Un armisticio la concluía: en un episodio oscuro (en el que tuvo participación Bolívar) Miranda fue entregado a los realistas, para terminar en cautiverio su complicada vida; Bolívar, que no entendía por su parte dar por terminada la lucha, se refugiaba en Nueva Granada.

Mientras los *mantuanos,* aristócratas de Caracas, daban por terminada su fútil revolución, otros continuaban la lucha: los pescadores y marineros negros y mulatos de la isla Margarita y la costa de Cumaná. Los jefes eran ahora Piar, mulato jamaicano, Bermúdez y Arizmendi. La guerra en el Este tomó pronto carácter salvaje: los alzados mataban con especial predilección a los colonos canarios, demasiado numerosos y emprendedores; éstos se constituían en columnas del orden realista, cazando revolucionarios y coleccionando los despojos de sus mortales hazañas. La tropa realista se adaptó demasiado bien a ese nuevo tipo de guerra, y los que habían desencadenado el proceso podían ahora comprobar que no era fácil

detenerlo. Mientras Mariño, el jefe del alzamiento de Cumaná, avanzaba desde el Este, Bolívar -tras una breve experiencia en la caótica revolución neogranadina- reaparecía en los Andes venezolanos: también él avanzaba con tropas abigarradas hacia Caracas, también él adoptaba el nuevo estilo de guerrear que la segunda revolución venezolana había introducido, y lo institucionalizaba el 15 de junio de 1813, decretando la guerra a muerte, el exterminio de todos los peninsulares y canarios que pudiesen caer bajo la venganza revolucionaria. En agosto entraba en Caracas, mientras Monteverde se refugiaba en Puerto Cabello.

La resistencia realista iba a encontrar un nuevo jefe en Boves; con él otra región venezolana entraba en la lucha: los Llanos, la estepa ganadera entre la rica montaña costeña del cacao y el Orinoco, límite de las tierras dominadas. Aquí, en torno de una ganadería menos próspera que la rioplatense, había surgido una humanidad mestiza de pastores jinetes, dirigidos por capataces en nombre de propietarios a menudo remotos. Boves -ex marino asturiano de turbio pasado- los iba a conducir, en nombre del rey, contra la rica Caracas. Los andinos de Bolívar, los costeros de Mariño, fueron finalmente derrotados por los llaneros de Boves; Bolívar se refugiaba nuevamente en Nueva Granada, para pasar a Jamaica; desde allí iba a dirigir un fracasado intento contra Caracas, para volver a su refugio en esa colonia británica.

Venezuela se transformaba ahora en fortaleza realista: en 1815 -primer fruto del retorno de Fernando VII al trono de España-, diez mil hombres, mandados por el teniente general Morillo, llegaban de la metrópoli y preparaban, desde Caracas, el golpe de gracia contra la revolución de Nueva Granada. Ésta había tenido una trayectoria menos trágica, pero sin duda más agitada que la venezolana. La hostilidad que en el sur del virreinato Pasto y Popayán mostraban al nuevo régimen no alarmó a sus dirigentes; tampoco parece haberlos inquietado que esas comarcas disidentes fuesen la prolongación del bloque sólidamente contrarrevolucionario que formaban

Quito y el Perú. Más daño iba a recibir la revolución neogranadina de sus propios jefes y de las tendencias dispersivas que en ella iban a dominar. En la región que albergaba a la capital virreinal, Nariño, que hacía la veces de revolucionario extremo, lograba desplazar al más moderado Lozano y erigirse en presidente de la república de Cundinamarca; ésta se resignaba mal a confundirse en las Provincias Unidas de Nueva Granada, de las que terminó por retirarse y con las que llegó a estar en lucha. Sólo en 1814, cuando los realistas del Perú habían avanzado de Popayán a Antioquía y capturado a Nariño, la Confederación neogranadina –utilizando los servicios de Bolívar– lograba, a su vez, conquistar Bogotá y, finalmente, establecer un gobierno central, incapaz, sin embargo, de hacerse obedecer en toda la zona revolucionaria de Nueva Granada. Bolívar, retornado a Nueva Granada luego de la caída de la segunda revolución venezolana, abandonó la lucha cuando se hizo evidente que, aun en su agonía, el movimiento neogranadino se resistía a unificarse. Morillo entraba primero en Cartagena y luego en Bogotá; del alzamiento del norte de Sudamérica parecía no quedar ya nada.

En 1815, entonces, sólo quedaba en revolución la mitad meridional del virreinato del **Río de la Plata;** su situación parecía aún más comprometida porque ya la lucha había dejado de ser una guerra civil americana: la metrópoli devuelta a su legítimo soberano comenzaba a enviar hombres y recursos a quienes durante más de cuatro años habían sabido defender con tanto éxito y con sólo recursos locales su causa. Las cosas, como se sabe, iban a ocurrir muy de otra manera: la razón de este vuelco suele encontrarse en la política extremadamente –y, según se dice, innecesariamente– severa que siguieron los vencedores. Sólo ella habría impedido que Hispanoamérica volviera a entregarse a los blandos encantos del antiguo régimen, mejor apreciados, luego de cuatro años de guerra civil, aun por algunos de los que habían sido revolucionarios. Pero esta explicación deja de lado un hecho de alguna importancia:

por desagradable que hubiera sido la experiencia de la guerra civil, ella y sus consecuencias seguían existiendo; aun una política menos vengativa que la de los realistas vencedores hubiera hallado muy difícil imponer un orden estable a los –sin duda escasos– partidarios irreductibles de la revolución.

Ésta no había cambiado menos a las zonas realistas que a las revolucionarias: en unas y otras sus efectos habían sido semejantes. Los políticos y militares en primer término: ellos eran particularmente intensos en Venezuela y en algunas zonas marginales del Río de la Plata, donde se había asistido a una movilización popular en vasta escala, capaz de desbordar el marco institucional preexistente. Las consecuencias de este proceso eran demasiado evidentes y alarmantes para los dirigentes políticos de uno y otro bando; allí donde alcanzaba sus extremos, la disciplina social parecía en peligro de disolverse, y las persecuciones contra los realistas o contra los patriotas, contra los peninsulares o contra los criollos, corrían riesgo constante de transformarse en una guerra caótica de los pobres contra los ricos.

Pero aun salvando estos extremos, aun los más prudentes jefes realistas y patriotas se veían obligados a entrar por un camino cuyos futuros tramos los llenaban de una alarma no inmotivada. Tenían que formar ejércitos cada vez más numerosos, en los que las clases altas sólo proporcionaban los cuadros de oficiales; eso suponía armar a un número creciente de soldados reclutados entre la plebe y las castas. Tenían que mantenerlos pasablemente satisfechos; ello implicaba una tolerancia nueva en cuanto al ascenso. Ha pasado ya el tiempo en que en el ejército real hacían carrera sobre todo los españoles de España; ahora pasan a primer plano jefes criollos, y aun algunos de los futuros generales mestizos de la Hispanoamérica independiente han alcanzado su grado en las filas realistas: así, Castilla, Santa Cruz, Gamarra en Perú y Bolivia... Tenían además que dotarlos de recursos; y aquí la política toca con la economía. Historiadores llenos de justificada admiración recordarán los sacrificios espontáneos de las elites patriotas

(dejando en segundo plano a los impuestos a los recalcitrantes por gobiernos dispuestos a todo) o la habilidad que en el manejo de recursos cada vez más escasos permitió sobrevivir a tal o cual zona patriota o realista, encerrada en un cerco hostil. Todo ello se resume en una inmensa destrucción de riqueza: de riqueza metálica en primer término; la atesorada por oligarquías urbanas, iglesias y conventos, la empleada en obras de fomento por los consulados de comercio, encuentran ahora su destino en la guerra. De riqueza en frutos y ganados: sobre todo a estos últimos la guerra los consume con desenfreno.

Y estos cambios económicos se suman a otros, en una economía que ha conquistado por fin –y no sólo en las zonas patriotas– las ambiguas bendiciones de la libertad de comercio. En Buenos Aires, en la efímera Venezuela de Miranda, en Santiago de Chile, menos marcadamente en la Nueva Granada, encerrada por la naturaleza en su meseta, el libre comercio significa una vertiginosa conquista de las estructuras mercantiles por emprendedores comerciantes ingleses, que vuelcan sobre Sudamérica el exceso de una producción privada de su mercado continental. Todo es ahora mucho más barato; comienza la lenta ruina de las artesanías de tantas regiones; ésta no debiera hacer olvidar la más rápida –y en lo inmediato más importante– de quienes suelen invocarla en tono inesperadamente sentimental: los grandes comerciantes enriquecidos en la carrera de Cádiz. Éstos –políticamente sospechosos, económicamente perjudicados por el nuevo orden– encabezan la marcha hacia la ruina en otros sectores urbanos antes dominantes, apresurada a la vez por la depuración política, que en las zonas revolucionarias afecta a las magistraturas, y en las realistas a más de un gran propietario amigo de las luces.

En particular, la lucha contra el peninsular va a significar la proscripción sin inmediato reemplazo de una parte importante de las clases altas coloniales; aun en la más apacible Buenos Aires, los españoles peninsulares tienen, desde 1813, legalmente prohibido el comercio menudo, lo que no impide

que todavía por largos años figuren a la cabeza en las contribuciones forzosas para sostener la causa revolucionaria. Toda su vida aparece trabada por limitaciones: les está vedado andar a caballo, salir de su casa por las noches; no pueden ya ser albaceas ni tutores... Sin duda, estas disposiciones se cumplen sólo a medias, pero la benevolencia con que se las aplica no es siempre gratuita. Esta tragedia silenciosa, que encuentra su culminación en la guerra a muerte, ha comenzado ya a transformar la imagen que la sociedad hispanoamericana se hace de sí misma: el peligro que para las clases altas en su conjunto tenía la humillación y el empobrecimiento de los peninsulares era muy lúcidamente advertido por algunos jefes revolucionarios; aun así, no les quedaba otro camino que presidir ese riesgoso proceso. Vencida la revolución, la represión utiliza mecanismos parecidos: en Venezuela, luego de la conquista de Morillo, son bandas de mulatos vengadores del viejo orden las que quiebran la ilusión de una restauración en la concordia. Entre los realistas, como entre los revolucionarios, la plebe y las castas tienen su parte en la victoria y no tienen las mismas razones que las oligarquías locales, o los oficiales metropolitanos amigos del orden, para querer moderar sus consecuencias. Sin duda, la transformación de la revolución en un proceso que interesa a otros grupos al margen de la elite criolla y española ha avanzado de modo variable según las regiones, desde un máximo en Venezuela hasta un mínimo en Nueva Granada, donde las disensiones revolucionarias son las de las oligarquías municipales, cuyo dominio no ha sido aún cuestionado; el Río de la Plata, menos tocado que Venezuela por el proceso, que el poder revolucionario parece aún capaz de controlar, ha sido, sin embargo, más afectado por él que Chile. Pero en todas partes se ha avanzado demasiado en este sentido para que sea posible clausurar todo el episodio como una deplorable rencilla interna a las elites del orden colonial; hay ya demasiados interesados en que esto no suceda. Sería, sin duda, antihistórico ver en estos enemigos de la conciliación adversarios lúcidos del orden social prerrevolucionario; eran

tan sólo gentes escasamente interesadas en la supervivencia de ese orden y directamente interesadas, en cambio, en mantener abiertas las nuevas oportunidades que (al margen si no en contra de ese ordenamiento) la guerra había creado.

No es extraño entonces que la guerra continúe; el fruto de la severidad de los agentes de la restauración fue, más bien que la perpetuación de esa guerra, el aumento en el número de sus adversarios. Por añadidura, la guerra misma va a tomar ahora un nuevo carácter: aunque luego de los envíos de tropas a Perú y Venezuela los auxilios de la metrópoli vuelven a hacerse escasos, de todos modos ésta aparece dirigiendo los esfuerzos de supresión total del movimiento revolucionario, y la transformación de la guerra civil en guerra colonial no deja de causar tensiones entre los realistas: oficiales y soldados metropolitanos y criollos estarían pronto divididos por muy fuertes rivalidades. Pero, por otra parte, la posibilidad de nuevos apoyos metropolitanos parecía asegurar sostén indefinidamente prolongado para la causa del rey. Frente a ella, la de la revolución no iba a estar ya representada por focos aislados entre sí, cuyos dirigentes descubrían con creciente sorpresa (a menudo con creciente alarma), lo que significaba lanzar una revolución, y mostraban una tendencia notable a quedarse en el camino. Las empresas militares de liberación que ahora comenzaban no iban a estar marcadas ni por el zigzagueo entre revolución y lealismo español, que se creía hábil y se había revelado suicida, ni por la inclinación desesperada, y también suicida hacia la solución –como se decía entonces– catilinaria, hacia el alzamiento desordenado de la plebe demasiado tiempo sumisa que, a manera de alud, habría de derribar a los defensores del antiguo régimen. Ahora las soluciones políticas se subordinaban a las militares; a los episodios armados de una compleja revolución los reemplazaba una guerra en regla.

¿Pero precisamente podía la revolución hispanoamericana, al borde de la extinción, realizar lo que no había sabido hacer en la plenitud de sus fuerzas, contra un enemigo acorralado? Aquí la historiografía tradicional en Hispanoamérica, que antes que explicar la victoria revolucionaria prefiere la tarea infinita de cantar la grandeza de semidivinos héroes fundadores, no se equivoca del todo: la figura de los organizadores de la victoria es, en efecto, una de las claves para entender esa victoria misma.

No la única, sin duda. Entre la primera y la segunda etapa de la revolución hispanoamericana se dio la restauración en España y en Europa: de ella derivaban para la revolución peligros, pero también posibilidades nuevas. El gobierno británico, que había mantenido hasta entonces una cuidadosa ambigüedad, si no iba ahora a definirse en favor de la causa revolucionaria, iba a ser menos vigilante en cuanto a la provisión de voluntarios (y, lo que era más importante, de armas) para los ejércitos que combatían contra los realistas. Por su parte, Estados Unidos terminaba con la paz de Gante (1814) su segunda guerra de independencia; si tampoco allí la causa de la revolución hispanoamericana encontró apoyos abiertos del poder público, a partir de ese momento la neutralidad oficial se iba a mostrar más benévola para los patriotas: también allí resultaría cada vez más fácil comprar armas y reclutar corsarios. Esta apertura internacional casi clandestina no alcanzó nunca volumen considerable; que haya sido un elemento importante en el destino de la revolución hispanoamericana, muestra qué limitados medios materiales requería ésta para llevar adelante su causa.

Los que llegaban a los adversarios de la revolución no eran, por otra parte, mucho más curiosos. Las victorias realistas de 1814-15 parecieron ser el anticipo de una intervención creciente de la fuerza militar metropolitana en América. No fue así, sin embargo; la restauración absolutista española enfrentaba demasiados problemas internos para poder consagrar un esfuerzo constante al sometimiento de las colonias aún sublevadas; tenía, además, que contar con la presencia de fuertes tendencias liberales en el ejército al que tocaría la tarea reconquistadora. Por otra parte, la pobreza pública y privada, que era consecuencia de la guerra peninsular, hacía más difícil

una empresa de reconquista necesariamente costosa. Por último, los dirigentes de la España restaurada no parecen haber advertido las dificultades mismas de la tarea que su obstinación les había llevado a emprender: volver a España y sus tierras ultramarinas al orden viejo les parecía un objetivo no sólo justo, sino fácilmente accesible.

Por añadidura, la España absolutista sólo presidió la etapa primera y menos grave del derrumbe de la causa española en América; antes de que pudiese medirse su capacidad de resistencia frente a las últimas extremidades, la revolución liberal de 1820 –proclamada por el ejército destinado a conquistar Buenos Aires– creaba una situación nueva. Sin duda, la España liberal no aspiraba a liquidar alegremente los dominios ultramarinos (por el contrario, mostró esa tendencia a renovar sólo los medios y mantener los objetivos de la España del antiguo régimen, que ya había irritado a tantos americanos en la política de las Cortes de Cádiz). Pero aún el cambio de métodos se hacía riesgoso, cuando se habían producido ya las primeras etapas del retorno ofensivo de la revolución. Salvar lo salvable, reconociendo la independencia de las tierras que se habían revelado inconquistables, manteniendo, en cambio, el dominio de las que se habían mostrado más sumisas; o bien reformar audazmente la relación global entre España y las Indias, creando un conjunto de reinos ligados por una unión personal dinástica o aun por un más flexible pacto de familia; estos proyectos podían ser razonables desde una perspectiva metropolitana. Pero en la resistencia contra la revolución emancipadora, sus adversarios locales habían contribuido más que la metrópoli y no iban a aceptar pasivamente constituirse en víctimas propiciatorias para la reconciliación entre ésta y los insurgentes. La España liberal fue vista desde el comienzo con desconfianza por los hispanoamericanos hostiles a la Revolución: éstos tratarían, en algunos casos, de imponer el mantenimiento de la política más intransigente, que había sido la de la restauración absolutista; en otros más numerosos, de preparar discretamente una reconciliación con el bando opuesto, que en vista de la relación de fuerzas se daría necesariamente bajo el signo de una victoria revolucionaria; ambas reacciones iban a debilitar la capacidad de resistencia realista.

La restauración del absolutismo en 1823 llegaba demasiado tarde para influir en los nuevos equilibrios locales que preparaban el desenlace de la guerra de Independencia. Por otra parte, iba a implicar un nuevo debilitamiento de la gravitación de la metrópoli en la lucha hispanoamericana. La restauración del absolutismo español por la Francia de Luis XVIII marcó un momento importante en la quiebra de la inquieta concordia que había caracterizado a los primeros años de la restauración europea; era el fruto de una victoria diplomática de Francia frente a Inglaterra, pero precisamente por serlo no podían derivarse de ella todas las consecuencias que hubiesen sido en principio pensables. Un nuevo avance de Francia –y de las potencias continentales con las que en este episodio había hecho causa común– no iba a ser ya tolerado por Gran Bretaña. Gracias a la restauración del absolutismo en España, la neutralidad británica se inclinaba más decididamente a favorecer a la revolución hispanoamericana; el auxilio que desde Miranda hasta Bolívar los revolucionarios habían esperado del retorno a la hostilidad angloespañola, se anunciaba ahora, sin duda más tardíamente de lo esperado, pero aún a tiempo para contribuir a un rápido desenlace del conflicto... A la vez, Estados Unidos, perdidas luego de la compra de la Florida española (1822) las últimas razones para guardar alguna consideración a la España fernandina, alineaban ruidosamente su política sobre la británica: la doctrina Monroe, formulada en diciembre de 1823, declaraba, entre otras cosas, la hostilidad norteamericana a una empresa de reconquista de Hispanoamérica por la Europa de la restauración.

En ese momento, la guerra de Independencia había ya avanzado hasta muy cerca de su final exitoso: sólo el Alto Perú, la sierra bajoperuana y algunos rincones insulares del sur de Chile seguían adictos al rey. El avance de la revolución había

sido la obra de San Martín y Bolívar; el primero, con la base que proporcionaban las provincias del Río de la Plata; el segundo, al comienzo sin base ninguna en el continente, habían encabezado dos campañas militares de dimensiones continentales.

José de San Martín, hijo de un funcionario español y de una criolla de Buenos Aires (perteneciente también ella a una familia de funcionarios regios), había comenzado una de esas carreras militares que en el Antiguo Régimen eran preferidas por tantos hijos de familias distinguidas y sin fortuna. Trasladado a la metrópoli desde casi niño, su formación profesional se vio enriquecida por la experiencia de la guerra de Independencia española: de ella iba a sacar enseñanzas que contribuirían a su propio estilo militar. En 1812, por vía de Londres, San Martín regresó a su tierra de origen, junto con otros militares españoles de origen americano. En Buenos Aires, reconocido como coronel y casado con la hija de una de las casas de más rica aristocracia patriota (lo que no impidió que la elite criolla lo tuviese siempre por ajeno a ella y, por tanto, escasamente digno de confianza), se dedicó a organizar un cuerpo, el de Granaderos a Caballo, que debía reunir a la adecuación al teatro americano una disciplina rigurosa y preparación suficiente para servir a una estrategia compleja (cualidades que faltaban, en general, tanto a los cuerpos insurgentes como a los improvisados por los realistas). En 1813, una primera victoria –poco más que una escaramuza– contra una incursión fluvial realista contra San Lorenzo, en la costa del Paraná; en 1814, un efímero comando del ejército del Norte en derrota; en seguida, mientras la estrella política de Alvear ascendía en Buenos Aires, el gobierno de la intendencia de Cuyo, al pie de los Andes. La caída de la Patria Vieja, de la primera revolución chilena, transformó a Mendoza en centro de refugio y consolidó la preferencia de San Martín por un nuevo plan de ataque a la fortaleza realista peruana, ahora a través de Chile y el mar, hasta Lima, que se había revelado inalcanzable por vía de tierra, separada como estaba de las provincias rioplatenses por

todo el espesor del altiplano altoperuano y el laberinto de la sierra bajoperuana. Para llevar adelante este proyecto, San Martín iba a contar bien pronto con el apoyo del sector chileno por el que se inclinó, el que reconocía su jefe en O'Higgins: el argentino y el chileno estaban ambos marcados por el sello de la escuela de honrada seriedad que habían sido, en sus mejores aspectos y en sus mejores momentos, la administración y el ejército de la España resurgente del setecientos. Por los Carrera y su política demasiado brillante, demasiado ambiciosa y personal, San Martín no sentía sino aversión; no trató de integrar a ese linaje de díscolos aristócratas amigos de la plebe entre sus apoyos chilenos; juzgó luego con severidad sus iniciativas, cada vez más abiertamente subversivas y destinadas a rematar trágicamente.

San Martín contaría también con el auxilio del gobierno de Buenos Aires. Éste había resurgido de la crisis de 1815, cuyas dimensiones (a la vez locales e internacionales) la elite criolla de Buenos Aires supo apreciar con admirable lucidez. Un nuevo congreso se reunió en Tucumán en 1816; un nuevo director supremo –Pueyrredón, también él hombre de la logia, cuyo influjo sobrevivía a la crisis– iba a mantener unidas a las más de las tierras rioplatenses durante tres años. Ello fue posible gracias a la alianza entre el sector gobernante de la capital y los dominantes en Tucumán y Cuyo, no tocados por el federalismo artiguista; el centralismo del régimen de Pueyrredón cubría mal una paulatina cesión de poderes efectivos a grupos locales en las cada vez más numerosas provincias creadas por desmembración de las intendencias virreinales. Esos grupos eran marcadamente conservadores, y ahora el tono general de la revolución rioplatense lo era cada vez más (un rasgo externo pero significativo: los diputados que en 1813 habían usado el término de ciudadanos para dirigirse a sus colegas preferían ahora el más tradicional de señores). Ese conservadurismo era además una tentativa de adaptación a la nueva coyuntura internacional; se acompañaba de la constante agitación de proyectos monárquicos que contaban, por otra parte, con la

adhesión de los jefes militares, y tenían por objeto último alcanzar una reconciliación con la Europa de la Restauración. En esa política no todo era oportunismo: tras de ella estaba también la desazón creciente de la elite porteña, cuyas bases económicas parecían cada vez más debilitadas por el avance mercantil británico, y que –luego de sufrir por primera vez, en 1814, las consecuencias locales de una crisis europea, con el derrumbe del precio de los cueros– tendía a hacerse una imagen más sobria de las ventajas e inconvenientes del nuevo orden económico.

El régimen de Pueyrredón seguía teniendo un flanco débil: la irreconciliable disidencia artiguista en el litoral. Contra ella utilizó el más censurado de sus expedientes políticos: otorgar su beneplácito a un avance portugués sobre la Banda Oriental, que desde 1816 mantuvo a Artigas absorbido por la defensa, cada vez más difícil, de su tierra nativa. Sus lugartenientes siguieron, sin embargo, resistiendo con éxito los avances porteños, y en 1819 el régimen de Pueyrredón mostró signos muy claros de descomposición espontánea; ese mismo año, una constitución centralista, que preparaba con nombre republicano un marco institucional para la proyectada monarquía, fue rechazada en casi todas partes. El régimen quiso utilizar al ejército para sobrevivir; San Martín se negó a traer de Chile, ya liberado, su ejército de los Andes, y el del Norte se rebeló en camino hacia Buenos Aires. Fue ese el punto de partida de la disolución del estado central, consumado cuando los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos –secuaces cada vez más independientes de Artigas– se abrieron el camino de Buenos Aires.

Al régimen de Pueyrredón se le dirigieron los más severos reproches póstumos; en medio de ellos tendía a olvidarse que una de las causas de su caída era la seriedad con que había asumido la tarea de proporcionar los medios para la guerra que iba a librarse más allá de los Andes: una parte del aborrecimiento que había ya despertado en 1819 provenía de los prolongados sacrificios que había exigido de sus gobernados. Pero la ayuda de las provincias del Río de la Plata, en su con-

junto, no fue en la empresa chilena de San Martín más importante que la que él logró extraer de la provincia de Cuyo, por él gobernada y orientada por entero en su economía hacia la preparación del ejército. A comienzos de 1817, éste podía comenzar el avance a través de la cordillera, hacia Chile. Eran tres mil hombres los que afrontaban la empresa; el 12 de febrero, la victoria de Chacabuco les abría el camino de Santiago: allí O'Higgins era nombrado Director Supremo de la república chilena; en marzo, la derrota de Cancha Rayada estuvo a punto de terminar con ella, pero la victoria de Maipú, en abril, la salvaba (aunque la resistencia realista en el sur de Chile iba a durar todavía por años). La nueva república, que debía enfrentar la pesada herencia de disidencias legada por la patria vieja, iba a ser marcada por un autoritarismo frío y desapasionado, versión guerrera del arte de gobernar heredado de la ilustración española; para rehacer la cohesión interior, O'Higgins debió presidir la turbia eliminación del héroe guerrillero de la liberación de Chile, Manuel Rodríguez, irreductible en su adhesión a los Carrera. Contra los disidentes, y aún más decididamente contra los realistas, la revolución iba a emplear una política análoga a la de la restauración a la que había vencido: prisiones, confiscaciones, procesos inacabables...

La reconquista de Chile debía ser el primer paso en el avance hacia Lima. Éste era aún más difícil que la etapa anterior. Era preciso, en primer término, crear una marina de guerra; formada a partir de una diminuta flotilla con presas por ella conquistadas, ésta encontró su jefe en un gran señor aventurero, lord Cochrane, que la dirigió primero en expediciones de saqueo y destrucción sobre el litoral peruano; en agosto de 1820 partía para liberar Perú, con algo más de cuatro mil soldados, insuficientes para vencer a los más de veinte mil que formaban allí las fuerzas del rey. San Martín se proponía utilizar a su fuerza como un elemento de disolución del ya sacudido orden realista en el Perú; contaba con las molestias crecientes de una

guerra demasiado cercana y con las derivadas del bloqueo para sacudir la lealtad monárquica de los grandes señores criollos de la costa; luego de que los desesperados realistas habían abierto ese camino, estaba dispuesto también él a emplear el siempre disponible descontento indio de la sierra: también por esa vía la aristocracia peruana habría de ser ganada a la causa patriota, en la medida en que vería en su triunfo el atajo hacia la paz que necesitaría para poner término a la agitación indígena fomentada por ambos bandos.

Las primeras etapas de esta cautelosa conquista fueron exitosas: el desembarco en Pisco fue acompañado de un levantamiento espontáneo de Guayaquil, y seguido del de Trujillo y casi todo el norte peruano, volcado a la revolución por su gobernante, el marqués de Torre Tagle, un rico criollo que había sido designado –gracias a la nueva política adoptada por los realistas– intendente de la región. En el Sur, la campaña de la sierra agitó la retaguardia de Lima; a principios de 1821, el general en jefe realista, La Serna, derrocaba al virrey Pezuela y comenzaba conversaciones con San Martín, en el nuevo clima creado por el triunfo del constitucionalismo en España. Ambos jefes convinieron en la creación de un Perú independiente y monárquico; rechazado el proyecto por los ejércitos realistas, éstos se habían, sin embargo, debilitado con la inacción y el desgaste, y en julio los patriotas podían entrar en la capital peruana. A ello siguió la creación de un gobierno del Perú independiente, con San Martín como protector. El nuevo estado peruano iba a ser el más extremadamente conservador de todos los formados en el clima hostil al radicalismo político que dominaba luego de 1815. Ese conservadurismo no sólo reflejaba las ideas de protector de Perú; se extremaba todavía más para ganar el apoyo de la aristocracia limeña, necesario para consolidar el nuevo orden. Los hechos iban a demostrar cuán necesaria era esa cautela. Con los realistas dominando aún El Callao, Cochrane, insatisfecho con su parte en el botín de la victoria naval, había partido en busca de lucrativas aventuras en el Pacífico tropical. La campaña que proseguía en la

sierra era tan desgastadora para los libertadores como para los realistas; el proyecto originario de liberación de Perú contaba con la insuficiencia militar de los invasores, pero esperaba compensarla con apoyos locales. Si bien se había logrado al comienzo disminuir la capacidad de resistencia realista, esos apoyos habían sido y seguían siendo escasos, y la empresa peruana no tenía, aun en 1822, final visible, si no se contaba con nuevos auxilios externos.

Ellos sólo podían venir del Norte, donde Bolívar había ya realizado lo esencial de su empresa libertadora. Ésta había recomenzado en condiciones aun más desventajosas que las encontradas por San Martín: en 1817 no tenía Bolívar apoyo ninguno en Hispanoamérica, y aun en su refugio haitiano encontraba simpatías cada vez más limitadas, luego de su fracasada tentativa de 1816. La guerra del Norte iba a ser, desde el comienzo, distinta de la del Sur, y Bolívar era particularmente adecuado para ella. Descendiente de una de las familias más antiguas de Caracas, ligado con la aristocracia criolla del cacao, Simón Bolívar iba a mostrar toda esa precocidad de ingenio y temperamento, amenazada en otros casos de volcarse por falta de carriles adecuados en empresas alto irrisorias, que iba a caracterizar a tantos de los jóvenes criollos liberados de la disciplina colonial y no demasiado seguros de qué podían hacer con su libertad. En 1804, cuando tenía veintiún años, había ya hecho tumultuosa vida cortesana junto con los marqueses del cacao en Madrid, se había casado allí con una aristócrata caraqueña, había vuelto con ella a Venezuela para perderla a los pocos meses, víctima de fiebres tropicales en el traicionero paraíso serrano de Aragua. Antes de eso, había recibido sólida educación al lado de un personalísimo secuaz venezolano de Rousseau, Simón Rodríguez, y luego del más moderado y sólido Andrés Bello. Muerta su esposa, Teresa del Toro, volvió Bolívar a Europa, acompañado por su antiguo preceptor; a los veintiún años era ya un hombre íntimamente desesperado y, pese a su aparente movilidad de carácter, este rasgo estaba destinado a durar.

De nuevo en Madrid, en París y en Italia, Bolívar iba a vivir las primeras y más brillantes etapas del ascenso napoleónico; en la sociedad francesa, deseosa de olvidar el pasado demasiado cercano, en el Milán del reino itálico, en la Roma en que el Papa había hecho la paz con el heredero de la revolución, junto con sus renovadas experiencias mundanas iba a adquirir una experiencia más profunda de las realidades postrevolucionarias: la crisis del Antiguo Régimen, que para los más de los americanos era un puro dato teórico, había sido vivida desde dentro por Bolívar. Igualmente la crisis de la revolución republicana: si nunca pudo perdonar a Bonaparte su confiscación de la Revolución para su gloria y provecho, Bolívar advirtió, sin embargo, muy bien hasta qué punto la evolución autoritaria y militar de la Francia republicana estaba en las cosas mismas. Así fue madurando una imagen original de la futura revolución hispanoamericana, a la que se consagró mediante un juramento de sabor prerrománico en el Aventino. Si ni aun en sus horas más sombrías vaciló su fe en la república (en la que San Martín no había creído ni por un momento), esa república estaba destinada a ser autoritaria; la autoridad allí dominante se distinguiría del puro arbitrio porque estaría guiada por la virtud. La vieja justificación del absolutismo español, que en la pluma de los autores del siglo XVII había sido, más que una fórmula, la expresión de una fe apasionada (la que ponía en la conciencia cristiana del monarca un límite seguro a su poder), resurgía ahora con signo nuevo: la conciencia revolucionariamente virtuosa de los gobernantes republicanos aseguraría la libertad de la nueva Hispanoamérica. Tal como iban a reprochar adversarios contemporáneos o póstumos de Bolívar –desde Bogotá hasta Buenos Aires– su revolución no era entonces liberal, o –para ser más justos, pues tampoco las otras revoluciones hispanoamericanas, en cuyo nombre era formulado el reproche, lo eran de veras–, no se mostraba suficientemente penetrada de su deber de serlo, bastante dispuesta a disimular que no lo era, bastante dolorida de la imposibilidad en que se encontraba de construir en

medio de la guerra un orden liberal. En eso se ha encontrado luego la superioridad de la política bolivariana, supuestamente más cercana a la realidad que le tocaba ordenar. Pero esto último es discutible: baste observar que el autoritario reino de la virtud proyectado por Bolívar –tras de contaminarse de elementos cada vez más abundantes de la tradición prerrevolucionaria– se reveló totalmente irrealizable.

Sería, por otra parte, erróneo ver en esta diferencia entre la revolución del Norte y las del Sur tan sólo una consecuencia de la personalidad del libertador norteño. El liberalismo al que se oponía el autoritarismo boliviano retomaba también él una tradición prerrevolucionaria: la fe en el orden legal, desobedecido pero venerado desde los comienzos de la colonia, la fe en un ideal de gobierno impersonal, corporizado en una elite de funcionarios y magistrados, que había sido la del siglo XVIII. Ambas sobrevivirían mejor en las oligarquías urbanas, y éstas, que en Buenos Aires, en Santiago, en Lima o en Bogotá iban, a pesar de todo, a hallar la manera de mantener gravitación política a lo largo de la revolución, habían ya sido marginadas por la revolución venezolana; la causa patriota sólo podría afirmarse allí cortando sus lazos de origen con los mantuanos de Caracas, apoyándose en una plebe cuya organización debía ser esencialmente militar. Y por más que Bolívar iba a extender su República de Colombia hasta Guayaquil, y su hegemonía hasta Potosí, su primera y más segura base de poder estaba en su Venezuela, en sus jefes guerrilleros transformados en generales, a los que perdonó todas las infidelidades, con los que se negó obstinadamente –y muy sensatamente– a romper... Esa Venezuela era irreductible al ideal liberal; el de Bolívar, si no coincidía con la realidad de la revolución venezolana, por lo menos no entraba en conflicto inmediato con ella.

En 1817 ya era Bolívar un veterano de la revolución; a ésta había sacrificado su fortuna privada (que había sido muy grande) y ella lo había dejado como el único jefe de dimensiones nacionales al lado de los regionales en que los alzamientos venezolanos habían abundado; en ruptura con su grupo de

aristócratas capitalinos –que habían sido tan tímidos revolucionarios– ya había mostrado cómo podía encontrar apoyos entre los agricultores y pastores de los Andes; ahora volvería a encontrarlos entre las poblaciones costeras de color de Cumaná y Margarita (ellas mismas veteranas de la revolución); y los encontraría –lo que iba a ser aún más decisivo– entre los llaneros que en 1814 lo habían expulsado del país.

Ya en la incursión de 1816 una audacia nueva se había manifestado en la promesa de liberación de los esclavos, que estaban en la base de la economía de plantación de la costa venezolana. Ahora la clave de la victoria iba a estar dada por la alianza con Páez, el nuevo jefe guerrillero que había surgido en los Llanos, esta vez con bandera patriota. Con sus hombres, los trescientos que Bolívar traía consigo y los que seguirían llegando –en especial la Legión Británica (predominantemente irlandesa), que llegó a contar algunos miles de voluntarios–, se formó la fuerza militar que llegaría al Alto Perú. La alianza con Páez significó una penetración más efectiva en el interior venezolano, pero provocó la ruptura con los caudillos revolucionarios del este costeño, y ésta remató en la ejecución de Piar por orden de Bolívar. Pese a que éste emprendió de nuevo la conquista de Caracas, el litoral había pasado para él a segundo plano, y cuando la resistencia de Morillo le cerró el acceso a la capital retornó al interior llanero y a la Guayana. Desde allí iba a cruzar los Andes con cerca de tres mil hombres: esta hazaña, juzgada imposible, sería seguida por la victoria de Boyacá, que dio a los libertadores el dominio de Bogotá y de todo el norte y centro de Nueva Granada (excepto Panamá). La república de Colombia, que debía abarcar todos los territorios que integraban el virreinato de Nueva Granada (y que en el caso de Venezuela y Quito habían tenido dependencia sólo nominal de Bogotá) comenzaba a tomar forma. El congreso de Angostura le dio sus primeras instituciones provisionales (fines de 1819); en la diminuta capital de la Guayana, al borde del Orinoco, en tierras de frontera que la colonia había ignorado y en las que la revolución había encontrado su baluarte, nacía la nación que en la mente de Bolívar debía abarcar el norte de América del Sur y dirigir el resto mediante un sistema de alianzas. Angostura parecía crear un estado federal: cada una de las regiones parcialmente liberadas –Nueva Granada y Venezuela– tendría un vicepresidente, que tomaría a su cargo las tareas administrativas, mientras el Libertador y presidente proseguía la guerra.

Ésta se desarrolló primero en Venezuela, donde retomaba por ambos bandos su carácter de lucha irregular; los mayores esfuerzos de Bolívar debieron encaminarse a mantener la cohesión de las fuerzas patriotas. A lo largo de 1820, también en Venezuela se hicieron sentir las consecuencias de la revolución liberal española: acercamientos y conversaciones entre los jefes en lucha, armisticio temporario, debilitamiento de la cohesión del bando realista, minado por las deserciones. En 1821 la victoria de Carabobo abría a Bolívar la entrada a una Caracas desierta, abandonada por buena parte de su población; en ese mismo año Quito era liberado por Sucre, lugarteniente de Bolívar, que había avanzado desde Guayaquil y vencido a los realistas en Riobamba y Pichincha; simultáneamente Bolívar reducía el foco de resistencia realista de Pasto, nudo montañés cuya población mestiza había sido ganada para la causa del rey por la vehemente predicación de su obispo y las depredaciones de las tropas patriotas.

Colombia quedaba así libre de amenazas, y Bolívar disponible para nuevas acciones contra el núcleo realista de Perú. Mientras este proceso guerrero seguía su curso, avanzaba también la organización política de la nueva república. El congreso de Cúcuta le dio en 1821 una constitución más centralista que las bases de Angostura: Venezuela, Nueva Granada y Quito perdían su individualidad, y los departamentos en que se dividía el vasto territorio colombiano debían ser gobernados por un cuerpo de funcionarios designados desde Bogotá. La tarea de organizar el nuevo estado estuvo a cargo en primer término del vicepresidente Santander, y se reveló desde el comienzo muy difícil. La modernización social debía enfren-

tar por una parte la resistencia de la Iglesia, por otra, la de los grupos favorecidos por el viejo orden, que iban desde los propietarios de esclavos del litoral venezolano, escasamente adictos a la emancipación de los negros que estaba en el programa de la nueva república, hasta los grandes mercaderes y pequeños artesanos unidos en la enemiga contra el comercio libre que los sacrificaba por igual a la preponderancia británica. Pese a la amenaza implícita en la presencia de ese bloque conservador, tanto más poderoso desde que la ruina de la causa del rey lo engrosó con los más entre sus antiguos partidarios, la república vacilaba en privarlo de sus bases de poder; temía demasiado abrir así el camino a una evolución comparable a la que en Haití llevó a la hegemonía negra, que constituía una imagen obsesiva para los dirigentes colombianos (y no sólo colombianos) en esos años revueltos.

El nuevo orden buscaba entonces retomar la tradición de moderado reformismo administrativo, que había caracterizado a las mejores etapas coloniales. Pero le resultaba difícil hacerlo: no sólo las ruinas del pasado cercano y la necesidad de seguir costeando la guerra limitaban sus recursos; era acaso más grave que no tuviese –como lo habían tenido los funcionarios progresistas de la Corona– una base de poder ajena a sus gobernados; en estas condiciones la empresa de imponer un avance sobre líneas no aceptadas por los más influyentes de entre éstos estaba condenada necesariamente al fracaso. Las tensiones creadas por ese estilo de gobierno encontraron bien pronto expresión tanto en la aparición de tendencias localistas cuanto en la apelación a Bolívar. La primera tendencia era bastante esperable; la autoridad del gobierno de Bogotá sobre Venezuela fue siempre limitada: Páez, que tenía allí autoridad puramente militar, era de hecho el árbitro de la situación local. Más grave era que también en Nueva Granada esas resistencias se hiciesen sentir, y que fueran particularmente vivas en la capital.

En Bogotá, Colombia aparecía como una continuación agravada de esas Provincias Unidas de Nueva Granada, que

sólo por conquista habían podido dominar en la vieja capital virreinal. Santander, el presidente colombiano, no era bogotano; había formado en las filas hostiles a Cundinamarca durante la Patria Vieja, y después de Boyacá había emergido como figura dominante, luego de años de guerrilla en los llanos de Nueva Granada, que parecían haberlo alejado cada vez más del clima político capitalino. Frente a él, el veterano Narino (liberado por los constitucionales de su prisión en la Península) pasaba a ser el jefe de un localismo opuesto a la vez a las tendencias innovadoras y a los grupos avanzados de las distintas ciudades del interior neogranadino en que se apoyaba al nuevo régimen. La presencia de Bolívar contribuía, por añadidura, a marcar con el sello de la provisionalidad al orden político colombiano. Era muy natural que los jefes venezolanos lo tomasen como intermediario y árbitro frente al gobierno de Bogotá; era más grave que también los opositores neogranadinos a Santander afectasen esperar una rectificación para cuando –terminada la guerra– Bolívar ejerciese de veras su autoridad presidencial. Más grave aún era que Bolívar, sin romper con su vicepresidente, dejase en pie esa esperanza. Así la república de Colombia parecía tener desde su origen un desenlace fijado el golpe de estado autoritario que iba a unir, tras el Libertador y presidente, a los inquietos militares venezolanos y a la oposición conservadora neogranadina.

Ya antes de ese desenlace, por otra parte, zonas enteras de la república estaban sometidas, no a la administración civil de Bogotá, sino a la militar ejercida directamente por el Libertador. Era el caso del sur de Nueva Granada y toda la antigua presidencia de Quito, declaradas zona de guerra aun cuando ésta había cesado de librarse allí. Y, por otra parte, la autoridad de Bolívar iba a extenderse bien pronto más allá de las fronteras de Colombia; esa iba a ser precisamente la consecuencia del pedido de apoyo que le llegaba de San Martín. El resultado inmediato de éste fue una entrevista entre ambos libertadores en Guayaquil, en julio de 1822; el hecho de que San

Martín fuese recibido como huésped del presidente colombiano en una ciudad que Perú consideraba suya, señalaba ya de qué modo estaba dada la relación de fuerzas. El contenido de las conferencias no es conocido, salvo por versiones retrospectivas de parte interesada; el resultado es un cambio muy claro. San Martín, tras de manifestarse dispuesto a seguir la lucha bajo el mando de Bolívar, debió anunciar su retiro de Perú; éste era el precio que ponía Bolívar a su auxilio, y ahora la situación había cambiado por entero desde 1817: era Bolívar y no San Martín quien tenía tras de sí a los recursos de un estado organizado.

Pero algunas de las razones invocadas por Bolívar para no correr en auxilio de Perú eran demasiado reales: Pasto, mal sometido, iba a alzarse nuevamente y exigir una más costosa y sangrienta pacificación, con deportaciones en masa; sólo después de ella pudo Bolívar pasar a Perú, a mediados de 1823. Allí encontró a la revolución en derrumbe: la constituyente de 1822 se había apresurado a aceptar la dimisión de San Martín y a reemplazarlo por un débil triunvirato. En diciembre se declaraba por la república, repudiando las negociaciones emprendidas en Europa por emisarios de San Martín para buscar un rey para el Perú. En el manejo de la guerra no se advirtió una energía comparable, y en febrero la alarmada guarnición de Lima obligaba a designar presidente de la república a José de la Riva Agüero, aristócrata limeño pasado desde muy pronto a la causa de la revolución. Riva Agüero organizó la lucha con más tenacidad, pero no con más éxito que sus predecesores; el congreso, aprovechando una nueva oleada de derrotas, que llevaron a un momentáneo abandono de Lima, y además la presencia de Sucre al frente de tropas colombianas, lo derrocó; el jefe limeño –transformado en mariscal durante su breve permanencia en el gobierno– se refugió en Trujlllo, en el sólido norte revolucionario. En la constantemente amenazada Lima, el congreso hizo presidente al marqués de Torre Tagle, y solicitó con más urgencia la presencia personal de Bolívar en Perú: ahora éste llegaba a

Lima para recibir el título de libertador y poderes militares y civiles hasta la terminación de la guerra. El congreso que tales atribuciones le había acordado siguió consagrado a la redacción de una constitución extremadamente liberal: proclamada en noviembre de 1823, no iba a ser nunca aplicada.

Bolívar encontró en Perú una situación aún más grave de lo que el puro equilibrio militar anticipaba: era la endeble revolución limeña, tardíamente nacida bajo el estímulo brutal de la invasión argentino-chilena, la que vacilaba sobre su destino futuro. Desde Trujillo, Riva Agüero trataba a la vez con Bolívar y con los realistas; proponía a estos últimos un Perú independiente, bajo un rey de la casa de los Borbones de España; en lo inmediato proyectaba una acción concertada para expulsar a Bolívar de Perú. Revelada la escandalosa negociación, Riva Agüero pudo ser apresado y deportado. Pero Torre Tagle, encargado por Bolívar de entablar negociaciones con los realistas para un armisticio, las entabla simultáneamente por su cuenta con objetivos idénticos a los de su derrocado rival; a comienzos de 1824, luego de que un motín de la guarnición argentina entregó El Callao a los realistas, el presidente de Perú pasó al campo de éstos, con su vicepresidente y numerosos diputados y funcionarios; en ninguna parte como en Lima la elite criolla debió enfrentar opciones cuyos términos le resultaban todos repulsivos, y a comienzos de 1824 el menos desagradable parecía ser de nuevo el debilitado antiguo régimen, que esperaba más blando que la hegemonía militar colombiana que reemplazaba a la chileno-argentina.

Sólo una serie de victorias militares, logradas gracias a los recursos traídos del Norte, permitió a Bolívar sobrevivir: en agosto de 1824 la victoria de Junín le abría el acceso a la sierra; el 9 de diciembre de ese año, en Ayacucho, Sucre, al frente de un ejército de colombianos, chilenos, argentinos y peruanos vencía al virrey La Serna y lo tomaba prisionero. La capitulación de La Serna ponía fin a la resistencia realista peruana, salvo en El Callao, que sería tomado en 1826. En el Alto Perú, Olañeta, un jefe realista que había sabido hallar apoyos loca-

les, que le habían dado independencia de hecho respecto de ambos bandos, y acumular una cuantiosa fortuna privada, siguió unos meses la lucha; en 1825, Sucre vencía las últimas resistencias y, solicitado por los criollos de Charcas y Potosí, patrocinaba la creación de una república que llevaría el nombre de Bolívar; de ese modo, el Alto Perú escapaba tanto a la unión con el Río de la Plata, establecida por el virreinato en 1776, cuanto a la integración con Perú, que, heredada de tiempos prehispánicos, parecía nuevamente posible como consecuencia de las vicisitudes de la guerra.

Los últimos rincones de Sudamérica escapaban así al dominio español. Desde Caracas hasta Buenos Aires, cañones y campanas anunciaban el fin de la guerra. Ésta había terminado ya en el Norte: desde 1821, México era independiente.

Era ése el desenlace de una revolución muy distinta de las sudamericanas. Mientras en el Sur la iniciativa había correspondido a las elites urbanas criollas, y éstas, pese a las inesperadas miserias que la revolución les había traído, conservaban en casi todas partes en 1825 el control del proceso que habían iniciado, en **México** la revolución comenzó por ser una protesta mestiza e india en la que la nación independiente tardaría decenios en reconocer su propio origen.

Se ha visto ya cómo en 1808 se dio en México una primera prueba de fuerza entre elites criollas y peninsulares; vencedoras las segundas, la nueva oportunidad de 1810 iba a ser aprovechada por un inesperado protagonista. El cura de Dolores, rica parroquia en el centro-norte minero, era Miguel Hidalgo, hasta entonces un representante de ese conjunto demasiado escaso de sacerdotes ilustrados que habían secundado las iniciativas innovadoras de prelados y gobernantes. La imagen que de él tenemos está dada por estos últimos, que alentaron sin excesivo entusiasmo sus proyectos (que incluían desde la explotación de la seda hasta la presentación de obras de Molière por actores reclutados entre sus parroquianos indígenas); esta imagen es por lo menos incompleta; si como jefe revolucionario, Hidalgo reveló muy grandes limitaciones, es evidente que logró contar con la adhesión de multitudes fervorosas que no se advierte cómo hubiesen podido orientarse hacia ese supuesto precursor mexicano de Bouvard y Pécuchet. En septiembre de 1810, Hidalgo proclamaba su revolución: por la independencia, por el rey, por la religión, por la Virgen india de Guadalupe, contra los peninsulares. Peones rurales, y luego los de las minas, se unieron a las fuerzas revolucionarias, que tomaron Guanajuato, donde la masacre de la Alhóndiga (el granero público en que se habían refugiado, junto con los soldados del rey, los notables peninsulares y criollos de la ciudad) y el saqueo hicieron mucho por separar del movimiento a los criollos ricos. Más allá de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Guadalajara, cayeron ante el avance de los ejércitos rebeldes, inmensas multitudes mal armadas de composición perpetuamente variable: en octubre, la ola se acercaba a la ciudad de México; en Monte de las Cruces, los 80.000 hombres que seguían a Hidalgo fueron vencidos por los siete mil del general Trujillo; pero el vencedor, deshecho y diezmado, logró a duras penas refugiarse en la capital, cuya conquista era todavía posible. Hidalgo no se decidió a intentarla; prefirió retirarse para reorganizar sus fuerzas. La retirada le fue fatal; para sus seguidores anunciaba que (según, sin duda, habían temido siempre) el viejo orden, en cuyo derrumbe habían creído por un momento, seguía siendo el más fuerte.

La revolución se derrumbó; después de una retirada que terminó en fuga, Hidalgo fue capturado en Chihuahua y ejecutado tras de dejar un apasionado testimonio de su arrepentimiento; quien había sido hasta los cincuenta años apacible cura rural, tras de unos meses de ejercer una sangrienta jefatura revolucionaria, declaraba que en la prisión sus ojos habían visto por fin la realidad, e invitaba a sus compatriotas a no seguirlo en el camino que había llevado a su propia ruina y la del país. No iba a ser escuchado, y la revolución iba a encontrar un nuevo jefe en otro eclesiástico, José María Morelos.

A la vez encontraría un nuevo centro: no ya el noroeste de la plata y el maíz, sino el Sur, en que la meseta baja hacia el Pacífico. Lentamente, Morelos va a ganar el predominio sobre los demás jefes de pequeños grupos revolucionarios sobrevivientes, y contrarrestar las tendencias a la transacción con los realistas que comienzan a aparecer entre ellos. En 1812 domina el Sur; organiza fuerzas mejor disciplinadas que las de Hidalgo, elabora un programa que incluye la abolición de las diferencias de casta y la división de la gran propiedad en manos de enemigos, que en la tierra del azúcar, en que el cultivo de la caña margina lentamente los de subsistencia, satisface una exigencia colectivamente sentida. Deseoso de institucionalizar la revolución, convoca un congreso en Chilpancingo: en él resurgen las oposiciones que previamente había logrado vencer en el plano militar. Morelos –revelando un escrupuloso, pero por el momento suicida, respeto por el orden institucional– se inclinó ante las voluntades, dificultosamente elaboradas y algo incoherentes, del Congreso. No sólo por esta inesperada vocación parlamentaria se derrumbó la segunda revolución mexicana: a Morelos, que a partir de un movimiento indígena quería lograr una revolución nacional, moderada en su estilo pero radical en su programa, los realistas oponían un frente en que los criollos tenían lugar cada vez más importante. Una vez eliminada la herencia de rencores del pasado, atenuados por el común terror ante la revolución de Hidalgo, la unión de peninsulares y ricos criollos en defensa del orden establecido era un programa más factible que el de la revolución. También Morelos iba a ser vencido y ejecutado en 1815. Quedaban aún algunos focos de revolución: Vicente Guerrero resistía en el Sur; Félix Fernández, que había cambiado su nombre por el de Guadalupe Victoria, en Veracruz. Sofocado en lo esencial el alzamiento rural, en los años siguientes un cierto espíritu de disidencia parecía resurgir lentamente entre los criollos de la capital. No tuvo tiempo de madurar: la revolución liberal en España desencadenó súbitamente la independencia de México.

Aquí, como en América del Sur, la guerra de Independencia había abierto las filas del ejército, más aún que las de la administración y las dignidades eclesiásticas, a criollos en proporción antes desconocida: esto creaba las bases de un partido local más hostil a la revolución que adicto a la metrópoli. Por otra parte, los peninsulares tenían en México mayor gravitación que en cualquier otra comarca de las antiguas Indias; parecía inconcebible que cualquier cambio político que no incluyera una revolución social afectase seriamente a los dominadores de todo el comercio mexicano. Porque se creían dotados de suficiente fuerza local, también los peninsulares podían encarar una separación política de España. Ésta se produjo cuando el vuelco liberal de la política española pareció afectar por una parte la situación de la Iglesia, por otra la intransigencia en la lucha contra las revoluciones hispanoamericanas.

Sin duda, tanto el alzamiento de Hidalgo como el de Morelos –dirigidos ambos por eclesiásticos– habían llevado a su frente imágenes religiosas. Pero al mismo tiempo, sus revoluciones amenazaban la estructura eclesiástica y la riqueza de congregaciones y sedes episcopales; Morelos incluía explícitamente las tierras eclesiásticas entre las que habrían de ser divididas. No es extraño que la jerarquía eclesiástica se haya constituido en aliada del orden realista, que éste buscase justificación nueva en la defensa de la religión amenazada por turbas que proclamaba sin Dios ni ley. Ahora, en España, medidas semejantes a las propuestas por Morelos eran anunciadas públicamente por los grupos dominantes. Éstos mostraban además peligrosas inclinaciones a buscar un arreglo con las revoluciones hispanoamericanas: ante esa perspectiva, los defensores mexicanos de la causa del rey temían verse transformados en víctimas de la reconciliación universal: a cambio de un reconocimiento de la soberanía española en Indias, otorgar el poder local a los revolucionarios podía, en efecto, parecer desde Madrid un sacrificio escaso; un sacrificio tanto menos costoso si esos revolucionarios eran compañeros de

ideología y los leales significaban, con su adhesión al absolutismo, un peligro para la causa liberal en España y sus Indias.

He aquí, sin duda, causas muy razonables de desconfianza. Alentado por ellas, un oficial criollo, que había hecho rápida carrera por sus victorias en la lucha contra Morelos, Agustín Iturbide, se pronunció y pactó con Guerrero el plan de Iguala, que consagraba las tres garantías (independencia, unidad en la fe católica, igualdad para los peninsulares respecto de los criollos) y preveía la creación de un México independiente gobernado por un infante español cuya elección se dejaba a Fernando VII. Al pronunciamiento siguió un paseo militar: en el vasto país, Iturbide no recibió sino adhesiones, y con ellas tras de sí entraba en la capital. Como era esperable, Fernando VII se rehusaba a designar un soberano para su propio reino rebelado, pero sólo San Juan de Ulúa, la fortaleza que guardaba la entrada de Veracruz, seguía fiel al rey de España, y la independencia de México encontraba eco en la Capitanía General de Guatemala, que tras de haber permanecido bajo el dominio regio seguía ahora el destino de su vecino del Norte, de cuyo virrey había estado en tiempos coloniales en dependencia nominal.

Terminaba así la guerra de Independencia, que dejaba una Hispanoamérica muy distinta de la que había encontrado, y distinta también de la que se había esperado ver surgir una vez disipados el ruido y la furia de las batallas. La guerra misma, su inesperada duración, la transformación que había obrado en el rumbo de la revolución, que en casi todas partes había debido ampliar sus bases (al mismo tiempo que las ampliaba el sector contrarrevolucionario), parecía la causa más evidente de esa escandalosa diferencia entre el futuro entrevisto en 1810 y la sombría realidad de 1825. Pero no era la única: **Brasil** ofrece en este sentido un término de comparación adecuadísimo; allí la independencia se alcanzó sin una lucha que mereciese ese nombre, y –con todas las diferencias que de ello derivaron, y con las que desde tiempos prerre-

volucionarios separaban a la América portuguesa de la española– la historia del Brasil independiente está agitada (a ratos muy violentamente agitada) por los mismos problemas esenciales que van a dominar las de los estados surgidos en la América española.

En las diferencias entre la independencia de Brasil y la de Hispanoamérica remata un proceso de diferenciación que viene de antiguo; desde la restauración de su independencia, Portugal había renunciado a cumplir plenamente su función de metrópoli económica respecto de sus tierras americanas, pronto integradas junto con la madre patria en la órbita británica; aun los esfuerzos muy reales del despotismo ilustrado portugués por aumentar la participación metropolitana en la vida brasileña habían sido necesariamente menos ambiciosos que los de la España de Carlos III; esta segunda conquista contra la cual se había erigido, acaso más que contra la primera, la revolución emancipadora hispanoamericana, era en Brasil menos significativa (aunque en algunos aspectos, por ejemplo, en las migraciones de la metrópoli a la colonia, la intensidad del acercamiento fuese mayor que en Hispanoamérica, era aquí menos completa la imposición de una nueva elite administrativa y mercantil de origen peninsular, por sobre las jerarquías locales surgidas de etapas anteriores).

Diferente en el marco local, la situación de Brasil era también profundamente diferente en la perspectiva proporcionada por la política internacional, que adquirió importancia creciente a partir de las guerras revolucionarias y napoleónicas. Portugal, luego de una primera etapa que lo mostró integrando muy en segundo plano el bloque contrarrevolucionario, se había acogido a una neutralidad fundada en el doble temor a la potencia naval británica y a la potencia terrestre francesa, que la alianza de Francia y España transformaba en amenaza directa. Cuando el bloqueo continental impidió al reino portugués seguir eludiendo la opción, quiso, a pesar de todo, seguir manteniendo su neutralidad sin sacrificar por ello sus comunicaciones ultramarinas; pese a que nunca iba a

abandonar su cautela frente a la presion francoespanola, la opcion esencial estaba desde ese momento hecha Portugal debia mantenerse en el bloque britanico, solo dentro de el podia seguir manteniendo las lineas dominantes de su circulacion economica Ante las graves consecuencias de esa decision, la Corona portuguesa siguio, sin embargo, vacilando la fuga de la corte a Rio de Janeiro fue un casi secuestro perpetrado por la fuerza naval britanica que protegia a Lisboa

La perdida de la metropoli significo un cambio profundo en la vida brasilena, ahora Rio de Janeiro, capital aun reciente de una colonia de unidad mal consolidada, se transformaba en corte regia Por otra parte, y aun mas radicalmente que en Hispanoamerica, el alineamiento al lado de Inglaterra llevaba a un cambio en el ordenamiento mercantil, por los tratados de 1810, Gran Bretaña pasaba a ser en la vasta colonia la nacion mas favorecida (sus productos pagaban tasas aduaneras menores que los metropolitanos y sus comerciantes eran liberados de la jurisdiccion de los tribunales comunes, para gozar, a la manera de los mercaderes europeos en Levante, de las ventajas de un tribunal especial)

Todo ello no se daba sin tensiones, pero la relacion de fuerzas (unida a la actitud de una Corona a la que las experiencias de los ultimos veinte anos de historia europea no incitaban a la altivez) hacia imposible que estas encontrasen manera de expresarse en cualquier resistencia, por moderada que fuese, a la inclusion directa de Brasil en la orbita britanica Todo ello habia debilitado los ya fragiles lazos entre Brasil y su metropoli politica, prueba de lo delicado de la situacion fue que, a pesar de que desde 1813 Lisboa se hallaba ya despejada de franceses y el poder de estos se derrumbaba en Espana, y desde 1815 el orden restaurado se instalaba solidamente en Europa, la corte portuguesa vacilaba en retornar a su sede originaria, era en efecto muy dudoso que Brasil aceptase volver a ser gobernado desde ella en 1817, una revolucion republicana –anticipo de las que iba a conocer el Brasil independiente– estallo en el Norte, y no fue trabajo escaso someterla Pero en

1820, la revolucion liberal estallo a su vez en Portugal el rey se decidio entonces a retornar a su reino, dejando a su hijo Pedro como regente del Brasil, una tradicion no probada, pero verosimil, quiere que al partir le haya aconsejado ponerse al frente del movimiento de independencia de todos modos inevitable

La ruptura fue acelerada por la difusion de tendencias republicanas en Brasil, y por la tendencia dominante en las cortes liberales portuguesas a devolver a la colonia a una situacion de veras colonial, mal disfrazada de union estrecha entre las provincias europeas y americanas, estas ultimas insuficientemente representadas en el gobierno central Mientras el regente don Pedro ensayaba una politica intermedia, la guerra de Independencia se libraba ya de modo informal en el sitio de las fuerzas portuguesas, encerradas en Bahia, por tropas brasilenas Finalmente, ante las exigencias de las cortes liberales, que conminaban al infante a volver a una estricta obediencia a sus directivas centralizadoras, don Pedro proclamo la independencia en Ipiranga (7 de septiembre de 1822)

El reconocimiento de este cambio no fue demasiado dificultoso, en 1825, un mediador britanico lo obtenia –no sin ejercer alguna presion– de la corte de Lisboa El imperio de Brasil, surgido casi sin lucha y en armonia con un nuevo clima mundial poco adicto a las formas republicanas, iba a ser reiteradamente propuesto como modelo para la turbulenta America espanola la corona imperial iba a ser vista como el fundamento de la salvada unidad politica de la America portuguesa, frente a la disgregacion creciente de aquella En todo caso, si la unidad iba a ser salvada, lo iba a ser dificultosamente en 1824, de nuevo el Norte estaba alzado en una confederacion republicana, y poco despues ardia la guerra en el Sur, en la Banda Oriental, donde Brasil heredaba de Portugal una nueva y discola provincia, la Cisplatina, formada por tierras antes españolas En la capital una constituyente (en las que las voces de los amigos de los rebeldes encontraban eco insolitamente franco) debia ser disuelta por el emperador, que en 1824 daria

su *carte octroyée,* prometida en el momento mismo de la disolución: pese a estas tormentas, el imperio sería liberal y parlamentario. Aunque la ausencia de una honda crisis de independencia aseguraba que el poder político seguiría en manos de los grupos dirigentes surgidos en la etapa colonial, había entre éstos bastantes tensiones para asegurar al imperio brasileño una existencia rica en tormentas. En ellas encontraremos un eco más apacible de las que conmovían a la América española; unas y otras nacían de la dificultad de encontrar un nuevo equilibrio interno, que absorbiese las consecuencias del cambio en las relaciones entre Latinoamérica y el mundo que la independencia había traído consigo.

Capítulo 3
La larga espera: 1825-1850

En 1825 terminaba la guerra de Independencia; dejaba en toda América española un legado nada liviano: ruptura de las estructuras coloniales, consecuencia a la vez de una transformación profunda de los sistemas mercantiles, de la persecución de los grupos más vinculados a la antigua metrópoli, que habían dominado esos sistemas, de la militarización que obligaba a compartir el poder con grupos antes ajenos a él... En Brasil una transición más apacible parecía haber esquivado esos cambios catastróficos; en todo caso, la independencia consagraba allí también el agotamiento del orden colonial.

De sus ruinas se esperaba que surgiera un orden nuevo, cuyos rasgos esenciales habían sido previstos desde el comienzo de la lucha por la independencia. Pero éste se demoraba en nacer. La primera explicación, la más optimista, buscaba en la herencia de la guerra la causa de esa desconcertante demora: concluida la lucha, no desaparecía la gravitación del poder militar, en el que se veía el responsable de las tendencias centrífugas y la inestabilidad política destinadas, al parecer, a perpetuarse. La explicación era sin duda insuficiente, y además tendía a dar una imagen engañosa del problema: puesto que no se habían producido los cambios esperados, suponía que la guerra de Independencia había cambiado demasiado poco,